

**EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
CASTILFALE**

**MEMORIA HISTÓRICA Y BOCETOS PARA DOTAR AL  
AYUNTAMIENTO DE  
CASTILFALE  
DE ESCUDO DE ARMAS MUNICIPAL**

**MEMORIA Y ESTUDIO TÉCNICO E  
HISTÓRICO SOBRE ADOPCIÓN DE  
ESCUDO DE ARMAS POR PARTE DEL:**

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE**

**CASTILFALE**

**(LEÓN)**

**MEMORIA, INFORME Y ESTUDIO TÉCNICO E  
HISTORICO A FIN DE PROVEER AL AYUNTAMIENTO  
DE  
CASTILFALÉ DE  
ESCUDO DE ARMAS.**

**AUTOR: LAUREANO M. RUBIO PÉREZ.  
CATEDRÁTICO DE HISTORIA MODERNA  
UNIVERSIDAD DE LEON.**

<b>I. INTRODUCCIÓN Y CONSIDERACIONES PREVIAS.....</b>	<b>5</b>
1. La heráldica, los ayuntamientos y la heráldica Municipal en España.....	6
2. La heráldica municipal y la normativa vigente en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.....	14
3. Ayuntamientos leoneses y heráldica municipal en el marco de la Provincia de León.....	19
 <b>II. AYUNTAMIENTO DE CASTILFALÉ:     BASES HISTORICAS Y JUSTIFICATIVAS DEL     ESCUDO DE ARMAS MUNICIPAL.....</b>	 <b>30</b>
1. DE LOS ORIGENES A LA CONFIGURACIÓN ADMINISTRATIVA Y TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD CONCEJIL. DE LA VILLA AL NUEVO AYUNTAMIENTO DEL SIGLO XIX.....	31
1.1. Orígenes, repoblación, organización y consolidación de la Villa .....	31
1.2. La configuración de un nuevo sistema. El régimen señorial y la llegada de los nuevos señores. ....	36
1.3. La formación de la comunidad concejil, su organización política administrativa . El nuevo régimen municipal.....	41
2. EL MARCO TERRITORIAL, LA SOCIEDAD, LOS RECURSOS Y LOS COMPORTAMIENTOS SOCIALES.....	51
2.1. Los medios, las actividades y los recursos económicos La tierra privativa y la tierra concejil.....	52
2.2. Los hombres y la evolución demográfica .....	67
2.3. Sociedad, colectivismo y solidaridad vecinal....	70
2.4. La villa contra el marqués: los pleitos antiseñoriales y el endeudamiento colectivo.....	109

<b>III. EL ESCUDO DE ARMAS DEL AYUNTAMIENTO DE CASTILFALE...</b>	<b>122</b>
<b>1. Criterios de elaboración y justificación.....</b>	<b>123</b>
<b>2. El escudo de armas: descripción y elementos .....</b>	<b>125</b>
<b>3. Boceto del escudo en color.....</b>	<b>127</b>
<b>IV. LA BANDERA MUNICIPAL.</b>	

# **I. INTRODUCCIÓN Y**

## **CONSIDERACIONES PREVIAS.**

**II. AYUNTAMIENTO DE CASTILFALÉ:  
BASES HISTÓRICAS Y JUSTIFICATIVAS  
DEL ESCUDO MUNICIPAL.**

**MEMORIA HISTÓRICA**

# **1. DE LOS ORÍGENES A LA CONFIGURACIÓN ADMINISTRATIVA Y TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD DE CONCEJILE. EL NUEVO AYUNTAMIENTO EN EL SIGLO XIX.**

## **1.1.ORIGENES Y ANTECEDENTES. LA CONFIGURACIÓN DE LA VILLA EN EL CONTEXTO DE LA EDAD MEDIA Y DEL REINO DE LEÓN.**

Para entender buena parte del proceso histórico seguido por estas tierras orientales situadas en la confluencia de los viejos reinos de León y Castilla hay que remontarse a la Prehistoria a los primitivos asentamientos de pueblos vacceos y al sistema de poblamiento castreño que fueron desarrollando plenamente ligado al medio natural y a una temprana organización administrativa y social. En este contexto anterior a la era cristiana y en base a los hallazgos arqueológicos y a los escritos de Tolomeo la presencia del pueblo vacéo en estas tierras o parameras parece dejar su impronta como pueblo prerromano a juzgar por su organización y formas de vida agrícola y silvo-pastoril, desde el apoyo que los recursos naturales y bosques parecen dar a las primitivas comunidades. Pequeña actividad agrícola aprovechando los valles y una ganadería extensiva condicionada por el medio y el clima ocuparon la actividad de estos pueblos que de alguna forma marcaban o fijaban ya su territorio. La presencia romana a partir de los inicios de la

era cristiana y la búsqueda de minerales de alguna forma contribuyó a la fijación y amoldamiento de una nueva cultura y al asentamiento definitivo de unas poblaciones vinculadas al medio natural, a la cría de animales como el caballo y a la dominación de un espacio agrícola.

Pero, es durante la invasión de los pueblos bárbaros y a partir de la cultura visigoda cuando nuevamente el territorio meseteño se repuebla con una serie de asentamientos o núcleos que consolidan nuevas formas organizativas como el “*concilium vecinorum*” y de alguna forma ocupan y administran un espacio escasamente protegido e inseguro al situarse desprotegido de elementos naturales defensivos. La llegada de los nuevos invasores musulmanes a partir del siglo VIII y su rápida expansión hacia el norte afectó de forma importante a estos territorios meseteños situados al sur y al este de la provincia, territorios que de alguna forma se quedaron despoblados ya que sus habitantes huyeron hacia el norte en busca del refugio de la montaña.

Sobre estos antecedentes la llegada de la Edad Media supuso para estos territorios el inicio de una nueva etapa y de alguna forma la consolidación de un modelo social y económico fuertemente vinculado a los sistemas de poblamiento y a las disponibilidades de espacio productivo y labradío. La impronta de los reinos cristianos y en especial del reino Astur Leonés de alguna forma frenó la expansión musulmana y contribuyó a configurar un modo de vida estrechamente ligado al medio natural y a los recursos agro

ganaderos que a partir de la Alta Edad Media van a modificar el espacio y en cierto modo las propias relaciones sociales entre las diferentes comunidades de aldea. La temprana aparición de los monasterios bajo la tutela de los reyes leoneses viene de alguna forma a contribuir a la repoblación del territorio y a su progresiva organización. Monasterios como el de S. Claudio de León, San Isidro o el de Sahagún, etc., dejan su impronta y en buena medida contribuyeron a la consolidación de un sistema de poblamiento sobre el que se va a asentar el reparto del territorio con anterioridad a la llegada de los nuevos señores.

Así pues, el origen de la actual villa de Castilfalé se remonta a esos difíciles años de invasión musulmana y de forma especial a la presencia de antiguos pobladores cristianos y ascendientes de los visigodos que vivieron bajo el dominio musulmán y fueron protagonistas del proceso repoblador y de la necesidad de construir fortalezas de avanzadilla que posteriormente sirvieron para los reyes cristianos y para crear nuevos núcleos de población que ocupasen el territorio y trabajasen la tierra. En este contexto escasamente documentado por la documentación medieval y de los antiguos cenobios aparece ya en 1065 el nombre de Castrel de Hale, o el de Castrello de Fale en el año 1095 con clara referencia a la presencia de un castillo o fortaleza en torno al que se desarrolló un núcleo de población. Estos topónimos referentes a la presencia de un castillo o torre defensiva van a ir evolucionando en la Edad Media y Moderna hasta aparecer como Casteil de Falei y

posteriormente en el siglo XVIII Castil de Fale. No obstante, en la documentación moderna también aparece la referencia de Castrillo a la hora de denominar vulgarmente a dicha villa, lo que posiblemente guarde relación con un antiguo castro sobre el que posteriormente se levantó la fortaleza medieval. Tanto el castillo, cuya presencia se mantuvo de tapial hasta el siglo XIX, como la torre mudéjar del templo de San Miguel o la casa hospital de Peregrinos son muestras arquitectónicas que reflejan la presencia e impronta de los cristianos en territorio árabe (mozárabes) y de los mudéjares o moros que se mantuvieron en la tierra una vez que los reyes de León avanzaron la reconquista hacia tierras del sur.

#### DENOMINACIONES DOCUMENTALES DE LA VILLA

Todos los topónimos son evocadores de la presencia de una torre o castillo.

Nombre de la villa	Año
Castrello de Falei	1034
Castrelo de Fale	1095
Castrel de Hale	1065
Castrello de Fale	1095
Castrel de Faleli	1094
Castrello de Fael	1168
Castriello de Fale	1195
Castriel de Fale	1203
Castillo de Falle	1497
Castil de Fale	Siglo XVII-XVIII

Castrillo de Fale/Castrillo	Siglo XVIII-XIX.
Castilfale	Siglos XX

Es durante los siglos XI y XII cuando, bajo la tutela de los reyes leoneses se reorganizan y repueblan buena parte de estas villas terracampinas y de alguna forma el Fuero de León otorgado por Alfonso V en 1017 es el marco jurídico sobre el que va a girar el futuro desarrollo y el propio sistema concejil. Las constantes referencias a lo largo del siglo XI a Castil de Fale durante los reinados de Alfonso V(999-1028), Bermudo III( 1028-1037),Fernando I (1037-1065) y Alfonso VI rey de León, 1065-1109) ponen de manifiesto que el Castrello de Castilfalé y la propia villa se había constituido en un enclave e importante fortificación frente a los musulmanes. Ene esta misma línea durante el siglo XII y en los reinados de Dña Urraca, 1109-1126; Alfonso VII,1126-1157; Fernando II, 1157-1188 y Alfonso IX de León, 1188-1230, estas tierras experimentaron un importante proceso repoblador que se continuó durante el siglo XIII una vez que se consolidaron definitivamente las villas y el reparto del territorio.

## **1.2. LA CONFIGURACION DE UN NUEVO SISTEMA: EL REGIMEN SEÑORIAL.**

Aunque la temprana presencia de monasterios en estas tierras pudo facilitar tanto el poblamiento como la organización jurisdiccional y administrativa, todo parece indicar que muy pronto y de forma especial a partir del siglo XIII estas villas fueron cedidas progresivamente al dominio jurisdiccional de los señores y en consecuencia enajenadas del realengo<sup>1</sup>. Pero, es a partir de la subida al poder de Enrique II, 1366-1379, cuando el proceso enajenador del realengo se hace más palpable y cuando villas como Castilfalé son usurpadas o entregadas a nuevos señores que apostaron en la guerra por la causa de Enrique II y como tal fueron favorecidos por sus sucesores: Juan I, 1379-1388; Enrique III, 1390-1406; Juan II, 1406-1454; Enrique IV, 1454-1474. Este último rey culmina el proceso otorgando títulos nobiliarios a todas esas familias que se van a constituir en el marco leonés como los grandes señores jurisdiccionales: conde de Luna, marqués de Astorga, etc. La subida al poder por las armas de la reina Isabel I, 1474-1504, aunque frenó la expansión nobiliaria, consolidó la posición de estos linajes entre los que se encuentra el señor de las villas de Castrofuerte y Castilfalé, Pedro Barba.

---

<sup>1</sup> A partir del reinado de Fernando III, rey de Castilla y de León, 1230-1252, hay toda una sucesión de cortos reinados que progresivamente van entregando el territorio y su gobierno a la vieja nobleza y a los caballeros castellanos (Alfonso X el Sabio (1252-1284); Sancho IV, 1284-1295; Fernando IV, 1295-1312; Alfonso XI, 1312-1350; Pedro I el Cruel, 1350-1367). Con la muerte de Pedro I y la posterior guerra, accede al poder una nueva dinastía en plena crisis de la monarquía: los Trastámara.

En efecto, mientras que algunos concejos y villas del norte y oeste provincial logran mantenerse bajo la jurisdicción regia y su concejo nombrar cada año a un juez ordinario y a dos regidores concejiles, la villa de Castilfalé que en el siglo XIV contaba con una veintena de vecinos, pasa definitivamente a la jurisdicción de una familia, los Barba, que si bien no tenía raíces , sí había acumulado fortuna y servido a la causa del rey Enrique II, por lo que se vio compensada con la jurisdicción de estas dos villas.

Ahora bien, el futuro de la villa de Castilfaé empezó a jugarse a partir del siglo XIV, en plena crisis económica y política en la que ante el vacío de poder y la debilidad de los monarcas hizo que los nuevos señores, marques de Astorga, conde de Benavente, Valencia, conde de Luna, etc, empezaran a disputarse los dominios de toda la zona sur y sur-oriental de la provincia a partir de la presencia consolidada que ya tenían en sus villas de Valencia, Villamañán, Astorga, Valderas, etc. Las referencias documentales a los problemas y enfrentamientos nobiliarios durante la segunda mitad del siglo XV son constantes, así como las uniones del señor de Castrofuerte, el conde de Valencia y Benavente en contra de los intentos expansivos y por la fuerza del marqués de Astorga que tenía en sus villas de Villamañán y Valderas dos importantes centros de poder. El enfrentamiento es claro y la disputa por la posesión de estas villas y de otras, Villademor, Villahornate, etc, entre todos estos señores se hace más palpable a partir de la Guerra de Granada, 1492, y del triunfo del marqués de

Astorga en apoyo a los Reyes Católicos, ya que él fue el encargado de organizar las milicias para ir a la guerra en estos territorios leoneses. Esta posición hace que el marqués de Astorga busque ampliar sus dominios en plena crisis económica y demográfica a costa de señores como los de Castrofuerte.

La vinculación de la villa de Castilfalé a la familia de los Barba, señores y vecinos de la cercana villa de Castrofuerte se consolidó durante la crisis del siglo XIV, aunque esta familia logró mantenerse frente a los grandes gracias a la política matrimonial emprendida a finales del siglo XV y en el siglo XVI. El hecho de que el propio marqués de Astorga acuse a Pedro Barba, señor de Castrofuerte, de haberse guardado y negado a ir a la guerra de Granada, justifica que no alcanzase un título nobiliario hasta que en 1627 el descendiente señor de Castrofuerte y Castilfalé, Pedro Pacheco y Chacón, virrey de Nápoles y embajador en Roma, recibe de manos del rey Felipe IV marquesado, pero un marquesado que nada tenía que ver con la grandeza de España.

Es, pues, la política matrimonial lo que encarrila el desarrollo de los Barba a partir de la jurisdicción y rentas que poseen en las villas de Castrofuerte y de Castilfalé. El matrimonio de Pedro Barba con Isabel de Acuña, hija de los condes de Valencia, Enrique de Acuña, tiene como descendiente en el mayorazgo fundado por su abuelo, Pedro Barba, a Juan Barba Cabeza de Baca y Acuña que a mediados del siglo XVI se une con los señores de Toral de

los Guzmanes al casarse con Ines de Guzmán y posteriormente con el propio marqués de Astorga en la persona y heredero Pedro barba Cusanca que casado con una hija del marqués de Astorga tiene como heredero y descendiente a Pedro Barba Osorio a finales del siglo XVI. En estos momentos están ya unidos y emparentados los grandes títulos endeudados por su vida cortesana y estos pequeños señores enriquecidos por las rentas agrarias y dominio territorial. A pesar de que en 1522 el concejo de Castilfalé pleitea y se niega a pagar las alcabalas al conde de Valencia, Enrique de Acuña, el poder de éste recién victorioso de las Comunidades hace que definitivamente tengan que pagarlas al señor de Valencia hasta que el las dona a su hija casada con el señor de Castrofuerte, de ahí que durante toda la Edad Moderna las reciba este último señor.

Pero, esta política matrimonial tenía un riesgo para la familia original ya que pronto sería absorbida por títulos de mayor rango, tal como le ocurrió a los barba, señores de Castrofuerte en tanto que el señorío en el siglo XVII pasa definitivamente al dominio de los Pacheco y Chacón, que lo ostentan bajo el marquesado de Castrofuerte. Durante el siglo XVII se suceden diferentes marqueses y definitivamente la nueva familia se ausenta de la villa de Castrofuerte en la que habían vivido durante los siglos XV y XVI los Barba. Como otros linajes leoneses pasan a ostentar altos cargos en la corte y al servicio de la Corona y de sus propias causas mantienen unos altos ingresos gracias a las

rentas de sus dominios señoriales bien administrados por gobernadores y administradores que viven en la villa de Castrofuerte. En 1686 D. Francisco de Sotomayor pacheco y Barba es el tercer marqués de Castrofuerte y posiblemente el primer vizconde de Castilfalé, título otorgado por Carlos II a la familia que de alguna forma justifica el dominio jurisdiccional sobre la villa de Castilfalé. Así, su hija, Teresa de Sotomayor Pacheco Meneses y barba será la cuarta marquesa de Castrofuerte y la segunda vizcondesa de Castilfalé.

Pero, en pleno desarrollo familiar y en el siglo XVIII el marquesado de Castrofuerte a través de un nuevo mayorazgo y una vez que el título de vizconde de Castilfalé se convierte en conde a finales del siglo XIX, queda definitivamente consolidada la rama de los condes de Castilfalé.

En este mismo orden y dependencia la existencia en la ciudad de Burgos de un bello palacio bajo la denominación de Castilfalé tiene que ver con este último linaje ligado jurisdiccionalmente a nuestra villa de Castil de Fale. En efecto, es en 1550 cuando sobre un edificio anterior se inicia la construcción de un palacio renacentista que años más tarde, en 1565, será adquirido por el rico comerciante y regidor burgalés Andrés de Maluenga y lo convierte en la sede de su mayorazgo. Pero, la crisis del siglo XVII hace que pase a nuevos propietarios en la familia de los Brizuela y posteriormente en el siglo XVIII perteneció a la familia de Antonio Valdés y Bazán, Bailio General de Marina. Es en

plena crisis económica y después de haber servido para no pocos usos cuando es adquirido en 1920 por los condes de Castilfalé, D. García Muñoz Jalón y su esposa Asunción Vinuesa. Arreglado y reformado para su vivienda en 1969 sus dueños lo donan testamentariamente a la ciudad de Burgos. En la actualidad el palacio de Castilfalé es la sede del Archivo Municipal de Burgos.

### **1.3. La formación de la comunidad concejil y su organización política-administrativa. El nuevo régimen municipal.**

Una vez que la villa de Castilfalé fue adquirida por la familia de los Barba, señores de Castrofuerte, la situación va a cambiar para la villa ya que el señor adquiere al poder jurisdiccional que había ostentado el rey. Ahora bien, tal como van a demostrar los documentos posteriores de la Edad Moderna, el señor legalmente lo único que adquiere de manos del rey es la cesión del poder jurídico, es decir la capacidad de nombrar cada año a un juez ordinario que entienda en causas civiles y criminales, pero en modo alguno en otros asuntos relacionados con el dominio que ejercía ya el concejo. En efecto, hay que entender que cuando el señor de Castrofuerte accede a la jurisdicción de Castilfalé la villa ya está organizada y gobernada de la misma forma que su concejo ya el titular del dominio de un término determinado por las correspondientes arcas.

Aunque desconocemos los vínculos económicos que la villa tenía con el rey en la alta Edad Media, parece claro

que la cesión del dominio era simplemente jurisdiccional, pero nunca solariega. Ahora bien, en plena crisis económica y en unos momentos del siglo XIV en los que la villa vería reducido considerablemente el número de vecinos el señor por la fuerza comenzó a demandar el reconocimiento de un dominio territorial que abarcaba a la tierra que no era privativa y labradía, es decir al monte y a la dehesa. En este contexto se entiende que el señor logre a finales del siglo XV que el concejo le reconozca el derecho a recibir de los vecinos un fuero, foro o renta perpetua por el disfrute de los recursos y del término, fuero que se va a fijar en función del número de yuntas que poseen los vecinos y de la tierra que van roturando, tierra a cuya propiedad se llama el señor. No obstante, pese a que el concejo y sus vecinos pagaron al señor diferentes cargas de grano hasta el siglo XIX, se iniciaba aquí un largo camino de pleitos y confrontación antiseñorial en una clara y fuerte disputa por el dominio y posesión del monte y la dehesa de Castilfalé, tal como veremos más adelante.

En este contexto el señor logró la vara de justicia y como tal convertirse en señor de Castilfalé, lo que le supuso la posibilidad de nombrar cada año a un alcalde o juez ordinario en la persona de un vecino de la villa que reunía ciertos requisitos como tener medios y recursos o ser entendido. Sus castigos y sentencias se podían apelar ante el gobernador o alcalde mayor del señorío situado en la villa de Castrofuerte, aunque las causas colectivas iban directamente en primera instancia a la Chancillería de Valladolid.

Por lo que respecta al gobierno y poder político de la villa la documentación moderna pone de manifiesto que la comunidad y su concejo mantuvieron la potestad de elegir anualmente los cargos u oficios de su ayuntamiento o gobierno. En efecto, cada principio de año, el concejo da el visto bueno a los cargos propuestos por el gobierno saliente: Dos regidores encargados del gobierno de la villa y un procurador general que se ocupa de las cuentas y de la representación de la villa. Este mismo gobierno se va a mantener desde la Edad Media hasta 1810 momento en el que quitado el poder a los señores los cargos salientes de la villa proponen la terna, dos nombres por cargo, para que sean nombrados por el Intendente General de la Provincia de León. Esos cargos son: alcalde ordinario, dos regidores y un procurador del común. Desde esos momentos y siguiendo la costumbre inmemorial el concejo de la villa y su gobierno va a recaer en sus propios vecinos y de alguna forma el gobierno va a estar asentado en dos pilares: el poder concejil o concejo general de vecinos y el Derecho Consuetudinario ya que no tenemos constancia de que se escribiesen las ordenanzas concejiles por las que se rigió la villa desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Como tal, la villa contó hasta mediados del siglo XIX con su propia cárcel.

**GOBIERNO DE LA VILLA DE CASTILFALE  
DESDE EL SIGLO XIII HASTA EL SIGLO XX.**

<b>DESDE EL SIGLO XIII HASTA 1811</b>		
<b>Cargo u oficio</b>	<b>Duración</b>	<b>Nombra o elige</b>
Alcalde o juez ordinario	Anual	Marqués de Castrofuerte Un vecino de la villa
Un regidor por el estado de hijosdalgo	Anual	Propuesta del gobierno saliente. Aprobación del concejo
Un regidor por el estado llano	Anual	Propuesta del gobierno saliente. Aprobación del concejo
<p>Los elegidos no pueden ser parientes o familias directas, ni haber desempeñado cargos en un tiempo determinado.</p> <p>Tienen que poseer recursos con los que responder de sus actos y saber las cuatro reglas. A su vez el juez tiene que tener avalistas.</p>		
<p>La justicia(alcalde), los regidores y el procurador general forman el Ayuntamiento o ayuntamiento que siempre funcionó mediante el concejo general de vecinos. Sus actuaciones y acciones siempre estaban ligadas al concejo y no tenían capacidad operativa ni decisoria por si mismo. Incluso cuando se plantean problemas judiciales con el marqués, la justicia, es decir el alcalde, está presente, pues, pese a nombrarlo el marqués se entiende que como vecino es parte interesada y en nada vinculada con los intereses del señor, sino con la impartición de justicia civil y criminal. Hasta que la villa no contó con su propia cárcel los reos eran retenidos en la casa del alcalde.” <i>La</i></p>		

*justicia, regimiento, concejo y vecinos.... convocados a son de campana tañida como lo tenemos de uso y costumbre”.*

#### GOBIERNO A PARTIR DE 1811 Y HASTA 1835

Alcalde ordinario	anual	Nombra el Intendente Provincial a propuesta de una terna de dos nombres de vecinos que presenta el saliente con el refrendo del concejo
Dos regidores concejiles	anual	Nombra el Intendente Provincial a propuesta de una terna de cuatro nombres que presentan los salientes.
Un procurador del común	anual	Intendente con propuesta de dos nombres .

#### GOBIERNO A PARTIR DE LA CREACIÓN DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL. 1835

Un alcalde constitucional	Cuatro años	Elecciones . Sufragio censitario. Sólo votan los vecinos cabezas de casa varones censados que reúnen una serie de requisitos económicos.
---------------------------	-------------	--

Es a partir de las reformas liberales de los años treinta del siglo XIX cuando se suprimen definitivamente las jurisdicciones y la figura de los alcaldes al centralizar la justicia el estado en las nuevas audiencias provinciales y en los partidos judiciales. En este orden el poder político va a cambiar al constituirse los nuevos municipios o ayuntamientos. Así, desde 1835 y hasta 1850 la villa de Castilfalé fue sede y cabeza de ayuntamiento al que pasaron a depender las villas de Valdemora, Valdespino Cerón, Villabraz y Matanza. Pero, las posteriores reformas y la presión de las villas hacen que en 1851 se formen nuevos ayuntamientos y el de Castilfalé quede solamente con las villas de Villabraz y Valdemora. En 1853 Villabraz posee ya su propio Ayuntamiento y en 1857 el Ayuntamiento de Castilfalé está solamente formado por la villa de su nombre y por el despoblado de Monte.

## JURISDICCION Y CARGAS SEÑORIALES PAGADOS POR EL CONCEJO Y VECINOS DE CASTILFALE DESDE LA EDAD MEDIA HASTA EL SIGLO XIX.

Señor jurisdiccional	Tipo de carga	Importe anual
D. Pedro Barba Osorio Ascendiente en el siglo XVI del Marqués de Castrofuerte	Foro/Fuero o senara.	70 fanegas de trigo
El título de marqués se lo otorga en 1627 el rey Felipe IV a D. Pedro Pacheco y Chacón, virrey de Nápoles.	Derecho de Humazga al señor por el supuesto dominio territorial	60 reales
	Portazgo al señor del paso de ganados por el monte	150 reales
	Alcabalas	780 reales
	Casa dezmera de un vecino	20 fanegas de trigo 10 fanegas de cebada.
En 1565 D. Pedro Barba Osorio, señor de Castrofuerte y de Castil de Fale reclama del concejo de esta última villa el pago de un foro por importe de 45 cargas de trigo y 30 cargas de cebada anuales en concepto de dominio sobre el término. Esto provoca el importante pleito de referencia.		

En efecto, los vecinos y concejo de la villa de Castilfale estuvieron pagando hasta el siglo XIX toda una serie de impuestos al rey que de alguna forma eran poco cuantiosos si los comparamos con los que pagaron por otros conceptos a los grupos rentistas. Aparte de las alcabalas que pagaban los vecinos por todo lo que vendían y que las cobra el marqués por donación del rey a quien corresponden, los vecinos pagaron los diezmos, una fuerte carga que suponía el 10% de lo que producían y que iba a parar a manos del Abad de San Isidro de León, una parte y la otra a la catedral de León. De la parte del Abad se sacan 5 cargas de trigo y 5 cargas de cebada que percibe el párroco de la villa por su congrua. De la parte de la catedral de León se saca la tercera parte para los tres clérigos beneficiados de la villa. A su vez de las otras dos partes se saca una para el arcediano de Valderas.

Por su parte el marques de Castrofuerte recibe los diezmos del labrador que más produce y que se denomina la casa dezmera, siendo esta otra concesión regia. Los diezmos menores, es decir los que proceden de la venta de animales, vino, etc, van a parar a manos del párroco y de los beneficiados. En el año 1752 los diezmos pagados por los vecinos supusieron: 72 cargas de trigo, 30 cargas de cebada, 12 cargas de centeno y 180 cántaras de mosto. Los menores: 62 corderos, 12 arrobas de lana y 150 reales de foros. A su vez, cada labrador paga dos heminas de trigo a la iglesia, lo que suponen 6 cargas, así como tres celemines de trigo en concepto de Voto de Santiago que importaron en 1752 2 cargas y hemina de trigo.

A su vez, una de las cargas más injustificadas es el fuero pagado al marqués en concepto de dominio sobre un término que o bien es privativo o bien comunal, pero que él reclama como señor del solar aunque no tenga documentos mercantiles. De hecho cada vecino que construía la casa en la villa debía de pagar el impuesto de humazga por que se suponía que el señor era dueño del solar. Estas imposiciones del siglo XIV se consolidaron posteriormente y fijaron por parte del señor en unos momentos en los que la población creció y se llevaron a cabo nuevas roturaciones de espacios vírgenes, con lo que el señor obligaba a los vecinos a reconocer su dominio mediante el pago de una parte de los frutos y posteriormente mediante la fijación de un foro que se repartía en función del número de yuntas que tuviesen , es decir los considerados como labradores con una yunta de bueyes pagan cada año una carga de trigo(4 fanegas) y los que poseen media yunta pagan media carga. Por su parte los senareros han de pagar entre tres y seis celemines de trigo por cada carga de tierra que trabajan, tierra que teóricamente posee al señor y que fue roturada comunitariamente y luego repartida en quñones (ver apéndice documental). A partir del siglo XVI el administrador del señor controlaba lo que debían de pagar los vecinos de la villa en función de las yuntas y en base a ese supuesto dominio del término. La cantidad oscilaba entre las 70 y las 130 cargas, en función del número de vecinos. Como se ve en la documentación el reparto se hace anualmente y se diferencian los vecinos labradores de aquellos denominados senareros que pagan menos en función de que sólo labran tierras roturadas y que

en su día se cultivaron mediante senaras conjejiles. Posteriormente el concejo las reparte entre estos vecinos jornaleros en quiñones que heredan de generación en generación. Por su parte el marqués entrega a los vecinos lotes de tierras o quiñones a cambio de un foro enfitéutico (a perpetuidad).

## **2. EL MARCO TERRITORIAL, LA SOCIEDAD, LOS RECURSOS ECONOMICOS Y LOS COMPORTAMIENTOS SOCIALES.**

## **2.1. LOS MEDIOS, LAS ACTIVIDADES Y LOS RECURSOS ECONÓMICOS. LA TIERRA PRIVATIVA Y LA TIERRA CONCEJIL.**

A través del catastro de 1752 podemos conocer cuales fueron las bases estructurales que de alguna forma permitieron el desarrollo de esta comunidad o villa durante más diez siglos, así como las posibilidades que le ofreció el medio natural para poder reproducirse sin romper el necesario equilibrio recursos población. Una de las primeras cuestiones que se plantean a la hora de entender el desarrollo histórico y social de estas tierras y de estas comunidades concejiles es el referente al espacio en su doble vertiente, la productiva y la social.

En primer lugar hay que hacer constar que los propios condicionantes físicos hacen que el espacio productivo labradío quede fuertemente reducido y por tanto condicionado a un reparto agroganadero de difícil equilibrio. A su vez, hay que tener en cuenta que los condicionantes climáticos forzaban de alguna forma la propia actividad agrícola y ganadera tanto en la estacionalidad como en los niveles productivos, lo que contribuye a explicar el propio reparto del terrazgo y de los medios de producción.

## MUESTRA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL TERRAZGO EN HEMINAS.

TIPO DE TIERRA	SEGLARES	ECLESIASTICOS
Hortaliza regadío	7	0
Trigal de secano	5578	5770
Centenales	639	468
Ferrañal y cebada	401	376
Prados	15	111
Viña	616	218
Monte	4796	
Terreno de pastos	734	88
Dehesa	4900	
Eras	103	
TOTAL TERMINO	17.786 heminas	7031 heminas

A través de esta muestra se puede deducir que estamos ante una comunidad con un término o espacio que pese a ser amplio de alguna forma limita las posibilidades de desarrollo , máxime si tenemos en cuenta que una parte importante de éste está ocupado por monte, además de la fuerte presencia de los propietarios rentistas eclesiásticos que se reparten al 50% el espacio labradío.

Pero, serán las sucesivas roturaciones de los espacios vírgenes los que permitan en ambos casos el cultivo cerealero de año y vez en torno a la producción de trigo y centeno que además de servir para la alimentación humana servía para el pago de rentas e impuestos. A estos hay que unir la importancia que progresivamente fue adquiriendo el viñedo y los recursos

naturales sobre los que se sustenta la cabaña ganadera. No obstante, la media de resultante de la superficie cultivada en relación con el número de vecinos nos coloca en unos niveles precarios que por debajo de las seis Hectáreas y en función de los reducidos rendimientos, viene a explicar el que estas comunidades terracampinas estuvieran pendientes de las crisis agrícolas. En este mismo orden, la presencia de prados y de forma especial del monte y de la dehesa, aunque reducida, contribuye a mantener una cabaña ganadera que se convierte en un medio fundamental de subsistencia. Desde la Edad Media y hasta el siglo XIX apenas hubo cambios y modificaciones en las formas y cultivos, lo que nos coloca en el siglo XIX y en la introducción de nuevos trigos que como el morcajo producen mayores rendimientos, lo que unido al incremento de los precios y a la extensión del viñedo parecen justificar la expansión demográfica de la villa.

En este contexto, los bienes o tierra de titularidad concejil y aprovechamiento comunal se ofrece como un medio fundamental para estas comunidades en tanto en cuanto va a permitir la actividad agrícola privativa o comunitaria toda vez que los concejos en función del propio desarrollo demográfico fueron entregando tierra comunal a los vecinos en régimen de usufructo gratuito mediante lotes o suertes. Aparte de esto los concejos usaron la práctica de la senara para sembrar colectivamente trozos de tierra concejil y así poder hacer frente a los pagos o cargas tanto del concejo como de los vecinos. No obstante, todo parece indicar que son los terrenos vírgenes, monte o dehesa, los que contribuyen a mantener no pocos gastos tanto de la propia

comunidad como de los vecinos a título particular, tal como se reconoce en el siglo XIX al explicar Madoz que la villa paga parte de los impuestos con los ingresos de la dehesa.

### **MUESTRA DE LOS BIENES CAMUNALES, INGRESOS Y GASTOS DEL CONCEJO. 1752,**

BIENES E INGRESOS	GASTOS
Una casa ayuntamiento del concejo	A la casa de H. de Valladolid 18 reales.
Casa y fragua	Al escribano: 150 r
Casa taberna: arrendada en 40 reales año.	Censo: 250 reales de réditos de un capital de 8.000 reales al Arcediano de Valencia.
Casa abacería: arriendo en 45 reales.	Portazgo: 150 reales. Humazga: 60 reales al marques de Castrofuerite.
Una casa y tejar	780 reales alcabalas al marqués de Castrofuerite.
Un plantío	
Pasto común: 381 heminas	
Monte de roble y encina: 4796	
Dehesa: 4900 heminas. El arriendo del pasto aporta al concejo: 4300 reales año.	Los vecinos pagan en función de sus yuntas: 70 fanegas de trigo al marques de Castrofuerite.
Tierras triguales : 47 heminas.	
Pasto comunal: 788 heminas.	

En este contexto es importante resaltar el papel que jugó la tierra a nivel social en tanto en cuanto la distribución social de la tierra hay que verla no sólo entre los propios vecinos, sino también entre los grupos rentistas. Sobre una superficie total del término que supera las 2000 cargas o Has. la tierra labradía está ocupada principalmente por el trigo de año y vez (secano), repartiéndose la propiedad los seglares y los eclesiásticos 50% y 45% respectivamente. Así, es de destacar la alta posesión que poseen las instituciones rentistas eclesiásticas y de forma especial las cofradías y conventos.

Por lo que respecta a los rentistas seglares el marques de Castrofuerte es el máximo hacendado ya que aparte de los derechos señoriales posee privativamente 81 fincas con una superficie total de 1103 heminas (92 cargas) todas sembradas de triguero salvo una finca de cebada de cabida de 12 heminas. El origen de esta propiedad hay que situarlo en la crisis del siglo XIV cuando el señor se adueña de terrenos vírgenes y los va cediendo a los vecinos en quñones para que los roturen a cambio de una renta. Todo ello sobre la base de que el nuevo señor entendía que le correspondía el dominio del término y como tal las tierras vírgenes, en unos momentos en los que la debilidad de la comunidad y la pobreza e indefensión de los vecinos le facilitaba estos abusos. Dado que la justicia posteriormente les reconoció el derecho a percibir esos fueros o foros los vecinos de Castilfalé como los de otras villas como Grajal de Campos hubieron de pagar una importante cantidad de granos hasta que en 1812 las Cortes de Cádiz decretan la abolición del régimen señorial.

Por lo que respecta a la sociedad y la estructura social de la villa hay que decir que apenas se vio modificada durante la Edad Moderna y durante el siglo XIX. Esta venía marcada tanto por la posesión de la tierra como por el nivel de la explotación agrícola y ganadera. Pese a la polarización social y a las desigualdades vecinales, es necesario apuntar que la condición de vecinos otorgada tanto a los labradores ricos, como a los jornaleros senareros, hace que la comunidad vecinal esté unida y vertebrada ya que ambos grupos se necesitaban mutuamente. Esto explica tanto las senaras como la defensa conjunta y comunitaria que hacen de sus derechos y recursos comunales, especialmente del monte y la dehesa que no sólo les reporta ingresos sino que sostiene buena parte de su cabaña ganadera.

#### **VECINDARIO DE LA VILLA DE CASTILFALE EN 1752.**

<b>NOMBRE</b>	<b>CONDICIÓN SOCIAL</b>	<b>PROFESIÓN</b>
Felipe Fernández	pechero	Labrador con dos criados y dos pastores
Gregorio de la Vega	noble	Labrador con una criada y un pastor
Simon Alonso	pechero	Labrador
Miguel Rodriguez	pechero	Labrador con dos criados, dos criadas y cuatro pastores.
Alejandro Merino	pechero	Labrador
Isidoro Pérez	pechero	Labrador

Bernardo de la Vega	pechero	Pastor
Juan de la Iglesia	pechero	Labrador
José González	pechero	Pastor
Domingo García	pechero	Labrador
Maria Bravo	noble	Labradora con un criado
Juan de la Vega	pechero	Pastor
Santiago Merino	pechero	Jornalero
Cristóbal de Robles	pechero	Labrador
Matias González	pechero	Jornalero
Juan de la Era	pechero	Labrador
Diego Roldan	pechero	Labrador
Dionisio Onpanera	pechero	Jornalero
Santiago Gaitero	pechero	Labrador
Antonio de la Iglesia	pechero	Labrador
Simon González	pechero	Labrador
Juan Fernández	pechero	Labrador
Pedro de la Iglesia	pechero	Labrador
Juan Gaitero	pechero	Labrador, un criado y dos entenados
Diego Robles	pechero	Labrador
José Herrero	pechero	Labrador
Isidro Andrés	pechero	Labrador
Marcos de Arce	pechero	Jornalero
Baltasar Colinas	pechero	Labrador, un criado y una criada
Bentura de la Vega	Noble	Labrador, un criado y un

		pastor.
Francisco Fernández	pechero	zapatero
Felipe Alonso	pechero	Jornalero
Miguel Ruano	pechero	Jornalero
Lorenzo del Rio	pechero	Labrador
Isidoro del Rio	pechero	Labrador
Santiago Alonso	pechero	Labrador, un criado
Matias Zancada	pechero	Soldado y jornalero
Manuel Baldés	pechero	Labrador
Angel Casado	pechero	Jornalero
Isidro Hordoñez	pechero	Servicial, criado
Manuel Uzeda	pechero	Labrador
Lucas González	pechero	Sastre
Madalena Delgado	pechera	Viuda
Andres Recio	pechero	Sastre
Catalina Mendez	pechera	Labradora
Francisco Manso	pechero	Labrador
Bernardo Merino	pechero	Labrador
Tomas Alonso	pechero	Jornalero
Baltasar Delgado	pechero	Labrador
Miguel Matanza	pechero	Pastor
Gaspar Vaca	pechero	Jornalero
Miguel Andres	pechero	Jornalero
Blas de la Iglesia	pechero	Labrador
Pascuala Alonso	pechera	Labradora
Francisco del Rio	pechero	Labrador
Alonso de Arce	pechero	Labrador y servicial

Baltasar Montes	pechero	Jornalero
Joaquín Fernandez	pechero	Jornalero
Santiago Manso	pechero	Labrador
Andres Blanco	pechero	Pastor
José matanza	pechero	Jornalero
José Fernandez	pechero	Labrador
Manuela Villamor	pechera	Viuda
Froilan Herrera	pechero	Jornalero
Antonio Rodríguez	pechero	Jornalero
Santiago Madaleno	pechero	Herrero
Antonio Rodriguez	pechero	Jornalero
Clemente Alonso	Pechero	Jornalero
Francisco Blanco	pechero	Pastor
Lorenzo Bravo	pechero	Labrador con un criado
Gregorio Ruano	pechero	Labrador
Juana Torbado	pechera	Viuda
Teresa Merino	pechera	Viuda
Manuel Alonso	pechero	Servicial
Miguel Blanco	pechero	Pastor
María García	pechera	Viuda
Cayetano Herrero	pechero	Sacristán
Isidro Fernández	pechero	Jornalero
Francisco Valvaje	pechero	Barbero

Tanto este vecindario como las diferentes pesquisas que adjuntamos en el apéndice documental sobre los labradores y senareros que han de pagar el foro al marqués nos van a permitir y en cierto modo a ayudar a comprender tanto la estructura social de esta villa como el comportamiento de toda una comunidad que se mantuvo unida durante siglos y en un alto grado de conflictividad colectiva por la defensa de algo tan importante para su futura como era la tierra y de firma especial el monte y la dehesa de la que obtenía el concejo importantes recursos.

En efecto, de los 79 vecinos con los que cuenta la villa a mediados del siglo XVIII se puede decir que tanto por su condición social como por sus propias explotaciones y recursos estamos ante una comunidad bastante polarizada, aunque con claro predominio de los vecinos jornaleros y deficitarios, situación que se matiza el poseer la propia condición de vecinos y como tal el acceso a los recursos comunales y a la pequeña propiedad tan importante para asentar la población. La estructura social viene marcada por ese grupo minoritario de vecinos labradores que cuentan con una yunta de bueyes, con criados y con explotaciones superiores a las cuatro Hectáreas, grupo que acoge entre el 25 y el 30% del vecindario y que de alguna forma disponen de importantes explotaciones en propiedad. Si tenemos en cuenta que en la villa hay 62 y que estos vecinos poseen como mínimo una yunta se puede decir que la fuerza de trabajo necesaria para labrar está en sus manos. En este contexto tan sólo el 15% de los vecinos con media yunta se pueden considerar clase media y autosubsistente, lo que de alguna forma justifica esa polarización y la necesidad mutua que tienen los vecinos

hacendados del trabajo de los jornaleros. A partir de estos niveles entraríamos en una nueva condición, la de los vecinos senareros denominados así porque trabajan quiñones de tierra (entre media y carga y media) que en su día fue roturada colectivamente por el concejo (siglo XVI) y que el señor consiguió que se le reconociese el dominio y como tal el derecho a cobrar un fuero o foro, tal como vimos con anterioridad. Estos vecinos senareros apenas poseen ganado y muchos son jornaleros por lo que se parte de ellos podían estar en ese grupo del 15% de propietarios autosuficientes, lo que incrementaría el porcentaje hasta el 35%. En conjunto se puede decir que el 40% de los vecinos de la villa figuran como jornaleros, pastores y en un 10% viudas pobres. Está claro que estamos ante una comunidad en la que solamente una familia, los de la Vega son nobles, por lo que de alguna forma se explica el control vecinal que el concejo intenta llevar a la práctica evitando otorgar la vecindad a forasteros hidalgos.

A su vez, la comunidad vecinal de Castilfalé estaba formada por un barbero sangrador, un herrero, un zapatero, dos sastres, 37 labradores, 17 jornaleros, 15 sirvientes, 9 pastores y 4 clérigos. Estos últimos son el párroco y tres presbíteros beneficiados. Se trata de tres clérigos presbíteros que pueden tener labranza y se benefician de los diezmos y primicias de la villa. Cuando queda vacante la plaza se presentan candidatos y es el concejo de vecinos quien se la otorga mediante un peculiar sistema de elección: en concejo cada vecino introduce un tito en la olla de barro que quiera ya que hay una olla con el nombre de cada candidato ( ver apéndice documental).

En este contexto parece claro que en la villa coexistan bajo los mismos intereses dos grupos que pese a estar diferenciados por la

propiedad de la tierra y por sus explotaciones se necesitan mutuamente: los labradores y los senareros, jornaleros, pastores y algunos nominados como sirvientes de otros vecinos y con pequeñas explotaciones. Se puede decir que estas villas eran autosuficientes en cuanto a la mano de obra indispensable para la recolección del cereal y para el trabajo de la viña, de ahí que a diferencia de otras zonas de Tierra de Campos, no se recurra a jornaleros forasteros temporeros. Esto, sin duda, explica tanto el desarrollo social y vecinal de la villa, como los comportamientos vecinales concejiles y alto grado de comunitarismo y colectivismo agrario a lo largo de los siglos. En fin esto explica que la villa conserve aún hoy día un rico patrimonio comunal y una Dehesa por la que los vecinos pleitearon durante cinco siglos y no dudaron en endeudarse e hipotecar sus recursos privativos y concejiles.

En este mismo orden no deja de ser sintomático que, tal como se aprecia en la documentación notarial, tanto la participación vecinal en los concejos, como el sistema de gobierno o el alto grado de conflictividad judicial a través de los poderes, coloque a la villa, junto a la villa de Santa Marina del Rey, a la cabeza de las comunidades litigantes a partir del siglo XVIII. Parece claro, pues que el importante sector vecinal definido como jornaleros y senareros tuvo una destacada participación en el gobierno y decisiones de la villa y en modo alguno se puede decir que fuese marginado por los ricos ya que en una comunidad cerrada como esta ambos grupos sociales se necesitaban y tenían los mismos intereses frente a los ataques externos y al propio señor jurisdiccional.

En este marco y pese a que el concejo de la villa no llegó a escribir las ordenanzas, lo que de alguna forma impedía el control y fiscalización del señor ya que funcionaron sin problemas mediante un Derecho Consuetudinario y mediante los poderes notariales otorgados por el concejo en base a la costumbre hecha norma. Por la propia documentación notarial conocemos el pleno control que el concejo de vecinos tiene tanto sobre los recursos privativos como de los comunales, en especial mediante el arriendo de la dehesa, el control de la cabaña ganadera, de los usos agrícolas y de la propia comunidad vecinal. Hasta tal punto es así que el concejo en 1784 ante el incremento del vecindario y la necesidad de tierra acuerda solicitar del rey una Real Provisión que prohíba a los forasteros arrendar tierras en el término ya que vecinos de Valdemoro, Villabraz o Castrofuerte se han metido a arrendar tierras de las cofradías y otros grupos rentistas en grave perjuicio de los vecinos. En este mismo orden el concejo de vecinos tiene capacidad para vender su propia tierra comunal o para solicitar en 1804 al rey una rebaja de impuestos ante la grave crisis existente. En efecto, en 1810 y ante los problemas emanados de la guerra contra los franceses y los pleitos sostenidos por el concejo, éste declara que se hallan en un alto grado de endeudamiento por lo que se ven obligados a aquíñonar y vender un trozo de tierra concejil, es decir las praderas de carenamoral y vadillo, dado que *los vecinos no pueden contribuir con tan crecidas cargas con las que se han gravado y continuamente se le esta gravando*.

Por lo que respecta a la cabaña ganadera es necesario tener en cuenta que no sólo está en función de la agricultura y de los

medios, sino también en relación con un importante recurso complementario que a la vez estaba limitado tanto por los espacios como por la necesidad de arrendar una parte de los espacios, dehesa, a la cabaña ganadera. Aunque existe todo tipo de ganado, será la cabaña vacuna y ovina la que predomine en tanto en cuanto el medio y los recursos lo permiten y los bueyes no sólo están limitados a la actividad agrícola, sino que no generan esquilmos. Son, pues, las vacas y sus crías el animal vacuno por excelencia, aunque las medias por vecino no superan la cabeza en una clara polarización de una cabaña sometida a una fuerte reglamentación concejil. En base al espacio y a la agricultura extensiva cerealera de año y vez se entiende el peso que tuvo la cabaña ovina, cabaña en la que participa la mayor parte del vecindario a través del rebaño concejil y de las prácticas colectivistas.

En este orden la cabaña ovina y caprina se convierte en la más numerosa con medias que oscilan entre las diez y las veinte cabezas por vecino toda vez que cada concejo limita el número que pueden poseer los vecinos en clara sintonía con las posibilidades del medio y de los pastos.

## **CABAÑA GANADERA DE CASTILFALE EN 1752**

TIPO	Nº DE CABEZAS
Bueyes	62
Vacas	54
Terneros	23
Yeguas y crías	19
Jumentos	30
Jumentas	35
carneros	277
Ovejas	1446
Corderos	876
Colmenas	5
Palomares	1
cerdos	43

## **2.2. LOS HOMBRES Y LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA.**

Al igual que el resto de las comunidades fundadas o repobladas en la Alta Edad Media, la villa de Castilfalé inició su andadura con poco más de una docena de vecinos o familias que de alguna forma se fueron ampliando paulatinamente sin que llegasen a superar la veintena hasta los inicios de la modernidad. Estas comunidades tenían por delante periodos difíciles como los siglos XIII, XIV y XIV, marcados por guerras, por presiones señoriales, por ocupaciones y innumerables problemas económicos y demográficos que de alguna forma limitaban su desarrollo incluso cuando la presión de los árabes dejó de existir. Es a partir del siglo XV y de forma especial durante las últimas décadas coincidiendo con el reinado de los Reyes Católicos cuando estas comunidades concejiles que ya se habían organizado políticamente para defenderse de los señores inician un proceso de expansión demográfico, una vez superadas las secuelas de la peste negra, avalado por la paz y por un importante proceso roturador de unos espacios vírgenes que en estos momentos constituían aún un amplio manto arbolado y de praderías naturales en los valles. Esta roturación y el posterior desarrollo de la agricultura cerealera y del viñedo permitieron que durante el siglo XVI estas villas terracampinas multiplicasen su vecindario por cuatro y en la mayoría de los casos superaran el medio centenar de vecinos en una clara fase expansiva durante el siglo XVI. La propia villa de Castilfalé alcanzó a finales del siglo XVI los 70 vecinos, es decir caso los 300 habitantes.

## EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LA VILLA DE CASTILFALE

**VECINOS (V). HABITANTES (H).**

**AÑOS / V (vecinos). H. habitantes.**

1587	1646	1652	1752	1787	1813	1857	1877	1887	1900	1950	1991
70	30	24	79	351	54	419(1)	378	353	353	439	132
V.	V.	V	V.	V.	V.	H.	H	H.	H	H	H.

(1) Ocho habitantes son del despoblado de Monte

Nota: la conversión vecino habitante equivale a una media de 4 habitantes por vecino.

En efecto, tal como muestra la tabla la villa alcanza su máximo esplendor a finales del siglo XVI cuando cuenta con más de setenta vecinos si tenemos en cuenta que a esos setenta hay que añadir viudas y algún hidalgo. Las razones hay que buscarlas dentro y fuera, en el marco estructural y en la dinámica económica y coyuntural. A la estabilidad política y social desarrollada a partir del reinado de los Reyes Católicos y durante los reinados de Carlos V y Felipe II, hay que unir el fuerte crecimiento económico experimentado por la Corona de Castilla y de forma especial de los mercados urbanos que reclaman productos agrícolas. El fuerte incremento de los precios favoreció que estas comunidades iniciasen un proceso de roturación en sus términos tan fuerte que animados por los señores y por los grupos rentistas casi arrasan las superficies de monte (roble y encina) que dominaban en el territorio. El reparto de las tierras roturadas en suertes, senaras o quñones entre los vecinos

permitió un importante desarrollo económico y demográfico que se reflejó en el fuerte incremento de vecinos.

Pero, ese crecimiento se había hecho a través de la ampliación de la superficie labradía hasta que llegó un momento en que no era posible labrar más. Durante la primera mitad del siglo XVII se culminó la crisis iniciada a finales del siglo anterior cuando la peste y las crisis agrícolas diezmaron la población. Posteriormente la guerra y la fiscalidad unida a la calamidad de los tiempos y años de penurias y malas cosechas terminaron por hundir la población de la villa que queda reducida a mediados del siglo XVII a una treintena de vecinos, la mayor parte senareros y sumidos en la miseria. Tendrá que llegar al siglo XVIII para ver la villa recuperarse hasta alcanzar el vecindario del siglo XVI y todo gracias a la recomposición económica y al importante crecimiento de un siglo que le permite ampliar el vecindario hasta la crisis coyuntural y los problemas de principios del siglo XIX cuando nuevamente la villa pierde una veintena de vecinos. Superada la crisis la villa entra en una clara expansión hasta alcanzar el centenar de vecinos durante a mediados del siglo XIX. En estas cifras y con un medio agrario que limita el desarrollo se mantuvo en el siglo XIX hasta el crecimiento del siglo XX que dio paso a la progresiva despoblación de los años ochenta del siglo XX.

## **2. 3. SOCIEDAD, COLECTIVISMO Y SOLIDARIDAD VECINAL.**

### **1. COMUNIDAD VECINAL Y ESTRUCTURAS SOCIALES.**

En este marco limitado y condicionado por los medios de producción las referencias a la estructura social de las villa de Castilfale, no sólo son importantes, sino que de alguna forma ayudan a comprender el funcionamiento de la comunidad vecinal y el alto grado de comunitarismo y colectivismo económico y social que conservaron durante muchos siglos de alguna forma movidos y motivados por unas limitaciones espaciales de sus términos y por la presencia de no pocos grupos rentistas que cada año llevaban una parte de sus cosechas y sus ingresos. En primer lugar hay que destacar que estamos ante comunidades que casi nunca superaban el centenar de vecinos o los trescientos habitantes, comunidades fuertemente endogámicas y con una gran carga tradicional en cuanto a su desarrollo.

En esta tesitura se explican muchos de los comportamientos vecinales y concejiles en tanto que durante siglos hubieron de hacer frente a muchas cargas impuestas por el Estado, por los señores feudales, por los clérigos y por otros grupos rentistas que se aprovecharon en coyunturas recesivas para hacerse con tierras y a través de ellas participar en la producción y control de los mercados de grano. Ello explica su constante preocupación del concejo a la hora de actuar de común acuerdo tanto los vecinos ricos como los pobres a jornaleros ya que todos estaban bajo los

mismos peligros y problemáticas y de alguna forma se necesitaban mutuamente.

En efecto, la presencia de algunas familias nobles o hidalgas en la comunidad vecinal no sólo hace que se elijan cargos concejiles vinculados a la hidalguía y a los pecheros, sino que el concejo vele porque en su comunidad no se asienten nuevos vecinos que puedan romper esta unidad. Por el contrario en aquellas comunidades en las que prima la presencia de pecheros se intenta frenar la llegada de hidalgos que no van a tener la obligación de pagar determinadas derramas concejiles. Esto explica la frecuencia de los pleitos en estas tierras entre los vecinos que pretenden que los concejos le reconozcan la hidalguía y los propios concejos que se la niegan y por ende le obligan a contribuir con las cargas como a los pecheros. En este contexto y en base a que sólo los pecheros estaban obligados a pagar el foro señorial se entienden los numerosos pleitos que tuvo que sostener el concejo de Castilfalé desde al siglo XVI hasta el XVIII, pleitos que le plantearon diferentes vecinos pidiendo que se le reconociese la hidalguía. Estos pleitos se inicial con la demanda puesta contra el concejo en 1495 por Juan de la Vega, pleito que ganó, de la misma forma que lo hace en 1749 Juan de Vega, de ahí que en 1752 los únicos vecinos que se le reconoce ser nobles o hidalgos sean Gregorio de la Vega y Bentura de la Vega, hijos del anterior. El resto de litigantes conocidos no obtienen el reconocimiento ante la oposición concejil. Estos fueron: 1524 Juan de Viñayo; 11512 Juan Martínez; 1528 Diego de Ribera; 1541 Francisco Viñayo; 1527 Diego de Ribera; 1553 Juan de Palacio; 1558 los hermanos Juan, Pedro y Santiago de Valdés; 1710 Pedro de Yera; 1762 Manuel de Ponga; 1814 Manuel Escanciano.

Por lo que respecta a la estructura social resultante en estas tierras cerealeras del sur, donde predomina la agricultura extensiva de año y vez combinada con el viñedo y donde los señores feudales, monasterios e Iglesia, poseen la titularidad de la mayor parte de la tierra labradía, hay que decir que la comunidad concejil estaba dividida en dos sectores o grupos: los labradores propietarios y los denominados senareros y jornaleros que, siendo vecinos y poseyendo casa y alguna finca, su explotación se centraba en tierras arrendadas y en la participación en las senaras que proyectaba el concejo, amén de los aprovechamientos comunales a los que tienen derecho como vecinos. Según refleja el estudio de las explotaciones se puede afirmar que es este modelo hay un 10% de vecinos considerados como ricos al poseer dos yuntas y contar con tierra suficiente que les genera excedentes que colocan en el mercado. Es frecuente que estos vecinos sean hidalgos y posean una importante cabaña ganadera ovina sostenida con pastores y criados. En este grupo pueden estar clérigos beneficiados que como vecinos mantienen unas importantes explotaciones. No obstante, no resulta fácil establecer una estructura social a partir de las explotaciones dado que el colectivismo de las senaras y la tierra concejil repartida en quiñones, así como la presencia de recursos alternativos lo hace harto difícil y no vincula tanto al vecino sobre la propiedad de la tierra.

No obstante, todo parece indicar que estamos ante la presencia hegemónica de pequeños campesinos con un alto nivel de autosubsistencia y dependencia concejil que podría abarcar al 50% del vecindario de cada comunidad. Tan sólo se aprecia un

reducido número de vecinos, que en modo alguno superan la media docena, que se consideran cuantiosos. A estos hay que unir un 30% de vecinos de medianos posibles que mantienen un nivel de ingresos suficientes para vivir y que de alguna forma son propietarios de sus tierras. Estamos, pues, ante comunidades polarizadas desde el punto de vista de sus explotaciones y de la generación de excedentes, lo que habría que matizar a la hora de valorar las posibilidades de desarrollo de estas villas y comunidades concejiles dado que la extensión de sus términos, los trabajos y usufructos colectivos ( senaras), el viñedo y los recursos alternativos ganaderos, garantizan la subsistencia de los vecinos y hacen que no existan pobres de solemnidad. La clave de esta situación, tan diferente a lo que ocurre en las villas castellanas de Tierra de Campos, hay que buscarla en el poder concejil y en la capacidad de autogestión de las comunidades vecinales cuyo origen hay que buscarlo en la Alta Edad Media, en el proceso repoblador y en la creación o reconstrucción de estas villas por parte de los reyes de León sobre tierra reconquistada a los árabes.

A partir de aquí la constitución de estas comunidades con categoría de villas se hizo sobre tres pilares fundamentales: la delimitación del término o espacio físico de cada comunidad fijado por las correspondientes arcas; la dotación de una institución política concejil propia con capacidad jurídica y de autogestión sobre la base del desarrollo de un Derecho Consuetudinario sobre el que se basaron las posteriores ordenanzas concejiles y de forma especial la presencia de amplios espacios vírgenes que bajo el dominio directo o útil de la institución concejil sirvió de base para el futuro desarrollo

vecinal y de la propia comunidad. Desde el siglo XV y hasta el siglo XX la villa de Castilfale tuvo en estos espacios una importante base de desarrollo conforme el vecindario iba creciendo y era necesario roturar más tierra.

## **2. COMUNIDAD, CONCEJO Y VECINDAD.**

### **2.1. Comunidad y concejo: a son de campana tañida.**

Una de las manifestaciones sociales y comunitarias que más implicación tiene con estas tierras del Reino de León y que de alguna forma le confieren una entidad propia tan fuertemente arraigada durante siglos que ha llegado hasta nuestros días superando sistemas, reformas y hasta el individualismo liberal del siglo XX, es el denominado *concilium vecinorum* o concejo abierto de vecinos.

A diferencia de lo que comúnmente se ha pensado, incluso por historiadores sesudos, el concejo es algo más que una mera reunión o forma de gobierno, sino que desde ese ámbito de institución con carácter jurídico propio el concejo en el Reino de León se convirtió en el marco institucional básico del dominante mundo rural tanto en el ámbito político administrativo, como en el pleno funcionamiento y desarrollo de las comunidades vecinales que lo integran. La villa de Castil de Fale cuenta ya desde el siglo XV con su propio concejo y con un marco jurídico de funcionamiento basado en el derecho consuetudinario y en una serie de normas de funcionamiento que a la vez que lo regulan le legalizan para dirigir e instrumentalizar el desarrollo futuro de la comunidad a través de la potestad de legislar o acordar, de ejecutar y de penalizar en lo que pasa a denominarse

justicia pedánea o concejil. El infructífero hallazgo de las ordenanzas concejiles de la villa nos conduce a pensar que estas normas o derecho consuetudinario escrito por las que se gobernó desde la Edad Media hasta el siglo XIX no existen, es decir, nunca se escribieron y posiblemente sea en el siglo XIX cuando se hiciese ante los nuevos problemas surgidos entre los propios vecinos a la hora de la interpretación o ante el mandato del Estado. Casos conocidos como el de la villa de Castrofuerte que, pese a redactar sus ordenanzas en 1761 y ante el desacuerdo vecinal no surgen efecto hasta el siglo siguiente nos ponen de manifiesto que a diferencia de las tierras del Orbigo, Páramo, Bierzo, etc., en estas villas del sur-este provincial las ordenanzas no se escribieron durante la Edad Moderna. Las razones pueden ser varias y pueden guardar relación con la polarización vecinal y las desigualdades sociales, con la fuerte presencia de los señores dueños de una parte importante de la tierra o con el intento por parte de los concejos de las comunidades de evitar ser fiscalizados tanto por los señores jurisdiccionales como por parte del Estado.

Pero, la no existencia de normas escritas no impide que durante la Edad Moderna y parte de la Contemporánea esta villa y su comunidad concejil no funcionase y desarrollase un importante y amplio derecho consuetudinario y todo un marco legislativo que fue pasando de generación en generación a partir de la costumbre hecha norma. Desde esta costumbre la regulación del funcionamiento del concejo estaba perfectamente ajustada tanto a los ciclos festivos como a los ciclos productivos y naturales en tanto en cuanto el concejo de vecinos, al que sólo pueden asistir los hombres casados cabezas de casa, tenía dos

tipos de reuniones: las cotidianas o regulares fijadas la mayor parte de los domingos a la salida de misa, salvo en la estación veraniega, como las extraordinarias o puntuales convocadas por los regidores concejiles a son de campana tañida. A todas las sesiones tienen obligación de asistir los vecinos bajo pena o castigo, a no ser que justifiquen la ausencia del pueblo o por enfermedad.

Así pues el concejo va más allá de la simple reunión y se convierte en institución con diferentes funciones políticas y gubernativas que van desde la elección anual de los oficios concejiles y la aprobación de las normas de funcionamiento, hasta el castigo a los infractores a través de las penas vinales, pagadas en vino, impuestas a los vecinos que han cometido infracciones o atentado contra los intereses y bienes públicos y privados. Es en el propio concejo donde los regidores sacan o hacen las pesquisas de los delitos, donde los propios vecinos se acusan mutuamente y donde se les imponen las penas conforma a la costumbre o al ordenamiento concejil.

## **2.2. Comunidad, vecino y vecindad.**

Sólo desde la plena comprensión del mundo rural leonés, de sus estructuras y de la operatividad manifestada en la práctica cotidiana por el ordenamiento concejil se pueden entender y valorar el control que los concejos llegaron a tener ya no sólo sobre los recursos concejiles, sino también sobre el conjunto social vecinal. El pleno dominio administrativo sobre el término y la fuerte dependencia de la mayor parte de los miembros de la comunidad de los recursos comunales se nos presentan como dos

pilares básicos a la hora de buscar explicaciones al alto grado de comunitarismo que llega incluso a ejercerse a través de la plena capacidad del concejo de otorgar o no la vecindad y de penalizar de alguna forma la soltería. Algunas ordenanzas leonesas mandan *que el mozo soltero llegando a cuarenta años sirva el oficio de mozo de concejo, segun lo hacen los demas vecinos segun se van casando, que es la antigua costumbre de cualquier estado o calidad que sean, estando el tal mozo sobre si en la casa aparte, para que después de haber servido el dicho oficio sirva los demas y guarde las demas veceras de concejo, pena de seis cántaras de vino y buscar quien sirva a su costa.*

No obstante, este comportamiento queda en buena parte justificado si tenemos en cuenta que los recursos existentes en el término bajo dominio concejil son limitados y que los movimientos coyunturales de la población va a afectar de distinta forma a unas comunidades y a otras. Además, el propio sistema de poblamiento, la hegemonía de pequeñas comunidades de aldea, situadas a muy poca distancia y el alto grado, los sistemas de herencia, la nuclearidad familiar, todo parece favorecer una tendencia, por otra parte generalizada en estas sociedades de Antiguo Régimen, al desarrollo y defensa de todo tipo de endogamias y dentro de ellas, la geográfica o local, persigue una doble estrategia, la patrimonial familiar y la social. El equilibrio demográfico y económico es necesario para estas comunidades campesinas y ellas mismas lo saben y como buenas conocedoras de su medio lo defienden desde la experiencia conocida de la tradición y de los tiempos pasados. En aquellos tiempos, en los que las estructuras y el propio sistema apenas da lugar a grandes

cambios la desconfianza de lo desconocido o de lo nuevo estaba más que justificada.

Parece claro que tanto lo limitado de los términos y recursos agrícolas, como la capacidad de autogobierno que tienen los concejos de estas dos villas les lleva a mantener un férreo control de los vecinos impidiendo la llegada masiva de forasteros y de forma especial de forasteros hidalgos o poderosos. Esto no sólo parece justificar la escasa entidad de los residentes no vecinos, sino también el control que los concejos ejercen sobre los vecinos, las familias y sus respectivos matrimonios. Sólo los admitidos por vecinos tienen derechos y deberes, es decir pueden disfrutar de los recursos concejiles y comunales, de ahí que sea el concejo quien otorgue esta categoría a los forasteros en tanto que los nacidos en la comunidad la tienen por naturaleza.

A partir de aquí se entiende como los concejos intenten controlar las bodas de los hijos de sus vecinos, favoreciendo las endogamias locales e intentando penalizar las uniones de forasteros, especialmente en el caso de las mozas. Como esto no se podía impedir ya que iba contra las Leyes del Reino, los concejos impusieron derechos de piso y otras cargas que habían de pagar los mozos en las bodas a fin de que toda la comunidad y su concejo se beneficiasen.

El control por parte del concejo de los vecinos de las villas y lugares de la provincia de León es una práctica generalizada, incluso en villas con cierta entidad de población. Es un derecho legalmente reconocido y regulado por el ordenamiento concejil que se enmarca en lo anteriormente expuesto y que tiene importantes repercusiones sociales y económicas para estas sociedades. Si bien ese control no presupone la negación de un

derecho de libre circulación por el territorio de la Corona de Castilla, resultaba harto difícil que personas o familias se asentasen en estas comunidades de aldea, lugares y pequeñas villas, sin el previo consentimiento de sus respectivos concejos. Esto explica, que a excepción de zonas vitícolas de El Bierzo en las que se asientan familias bajo la condición de residentes en clara relación con los empleos temporales para las oligarquías de la viña, en el resto de la provincia leonesa la presencia en el seno de las comunidades de familias o individuos residentes es mínima, entre otras cosas porque a falta de empleos temporales es muy difícil subsistir bajo la condición de residente al carecer de tierra, de deberes y de derechos con respecto al concejo. Algunas villas permiten la presencia de unidades familiares con sólo el título de habitantes, *hasta que se les de algún empleo de procurador general o mayordomo de propios, cuyo medio les habilita para el vecindario.*

Es esta una fórmula aplicada por los concejos de estas villas situadas al sur-este de la provincia a todos aquellos casados, hijos de vecinos y a los forasteros que pretenden avecindarse que entronca plenamente con la filosofía concejil de deberes y derechos por la que se obliga a los pretendientes a ocupar durante un año dos de los cargos más complicados y de mayor responsabilidad cuyo desempeño lleva implícita la necesidad de avales y responsabilidades de la gestión. En esta misma línea, en el propio acto de concesión de la vecindad y desde la condición indispensable de ser casado y formar una unidad familiar, los concejos separan a los hijos de los vecinos y a los forasteros. De esta misma forma queda claro que en la provincia leonesa se aprecian al respecto tres modelos o formas de comportamiento: el

minoritario y centrado fundamentalmente en el débil mundo urbano que no parece imponer grandes condiciones; el de zonas agrícolas ricas y con posibilidades de desarrollo que desde el férreo control concejil impone condiciones fácilmente llevaderas por los forasteros y el que se aprecia en zonas o comarcas cuyos recursos son limitados y en las que el colectivismo agrario es mucho más fuerte y necesario para la subsistencia. En determinados concejos de la montaña o en comunidades como de Maragatería donde no resulta fácil el equilibrio recursos población, los concejos imponen con frecuencia condiciones duras que rayan la ilegalidad.

En este último grupo es donde encontramos una férrea regulación del vecindario a través de las ordenanzas. En la Montaña leonesa el Concejo de Burón ordena que los vecinos nuevos que sean admitidos como tales por el concejo, según costumbre inmemorial gocen y contribuyan según hasta aquí han gozado y contribuido los demás antepasados su primer año y lo mismo se guarde y observe el año que mueren y el procurador de esta villa tenga obligación de tener libro en donde asiente el día mes y año en que entra el vecino por tal vecino y el día mes y año en que muere para la buena cuenta y razón de lo que deba percibir. Aunque en muchos concejos las condiciones impuestas a los nuevos vecinos se siguen rigiendo por la costumbre, otros, para evitar conflictos empiezan a fijar claramente las condiciones y deberes. Si un forastero quisiese la vecindad, después de solicitarla al concejo ha de pagar: *tres cántaras de vino, un pernil (jamón) de diez libras, un queso, el pan de trigo necesario y cincuenta reales en dinero, todo por una sola vez. Si es hijo de vecino o será necesario pedirle nada por ser costumbre antigua. Y si en una casa hay dos vecinos, pagando sesenta reales al lugar uno*

*quedará libre de todo cargo concejil y veceras de ganado, en cuanto a lo demás ha de servir y contribuir como los demás vecinos y también gozar de los aprovechamientos.*

En efecto, en las tierras llanas de vegas y páramos, el sistema de control vecinal es muy similar, aunque aquí se van a rebajar las duras condiciones que se imponen en la montaña. Los concejos de estas vegas donde los recursos son más abundantes parecen más preocupados en conocer la procedencia y condición de los solicitantes que las cargas en sí. En Santa María del Páramo mientras que los hijos de vecino han de pagar 500 maravedís por vecindad, los forasteros la alcanzarán mediante el pago de mil quinientos maravedís. Esta entrada como vecino ni a unos ni a otros se les negará, *siendo sujeto apacible.*

De la misma forma otras ordenanzas mandan que cualquier forastero que viniese a vivir al lugar y deseara alcanzar la vecindad, dándosela haya de pagar por ella de derecho al concejo cien reales y dos tazas de vino a cada vecino por la taza de plata que tiene dicho concejo. Pero, años más tarde y en una clara intención de frenar la llegada de forasteros es el propio concejo quien reforma esta ordenanza y manda que *cualquier persona forastera que quiera venir a este lugar a ser vecino de él y pidiese la vecindad, dándosela, haya de pagar por derechos al concejo doscientos reales de vellón y dos libras de pan de trigo y dos sardinas y dos tazas de vino a cada vecino por las tazas de plata que tienen el dicho concejo y si fuese del estado noble el que pidiese dicha vecindad dándosela haya de pagar por ella cuatrocientos reales y a cada vecino cuatro libras de pan de trigo, cuatro sardinas y cuatro tazas de vino.* En otros lugares las condiciones son más llevaderas al exigir a los que entraren de

vecinos el pago de una cántara de vino y una hogaza de vino, lo mismo que la moza que se casase.

Más al este y en las tierras orientales del Esla y Cea la capacidad de los concejos de controlar el vecindario queda también plasmada al mandar que *el forastero o hijo de vecino que casado pida la vecindad, se le de y pague por una sola vez tres cantaros de vino de buena calidad, un mollete de dos libras y dos sardinas a cada vecino y a las mujeres y mozos solteros un mollete de a una libra y una sardina a cada uno. Y si es forastero ha de pagar los mismos derechos de vino, pan y sardinas con la propia regla y trescientos reales al concejo además de hacer constar su estado y calidad, como esta acordado en la superioridad.*

### **2.3 Comunidad y signos de identidad. Las campanas y el pendón del pueblo son.**

Una vez que se ha constituido plenamente la comunidad vecinal y organizada la villa, a partir del siglo XVI intenta dotarse de elementos de identidad propios y para ello nada mejor que la construcción de una iglesia que a la vez que servía para el culto religioso era el referente de las actuaciones concejiles y de la propia comunidad. A partir de aquí cada comunidad concejil escoge sus santos protectores y las advocaciones religiosas más vinculadas a su situación geográfica o a sus antecedentes históricos. La iglesia o iglesias parroquiales se convierten en importantes medios de identidad, de poderío y de identidad de cada villa o comunidad concejil. El desaparecido templo de San Miguel y la presencia de una esbelta torre de influencia mudejar bajo la advocación de Santa Isabel se unen a la parroquia actual presidida

por S. Juan Degollado en un claro testimonio de los momentos álgidos de la villa en el siglo XVI y de las crisis posteriores. Detrás de todo esto está sin duda el importante desarrollo agrícola y el crecimiento económico y demográfico experimentado durante buena parte de ese siglo XVI. Esto hace que sea en estas villas cerealeras terracampinas donde ya en el siglo XVI cada villa construya esbeltas iglesias parroquiales con altas torres de tapial y ladrillo en clara referencia e influencia del arte mozárabe. Las conmemoraciones de la Cruz de mayo y del Santo Cristo del Amparo en Septiembre están estrechamente ligadas tanto a los cultos ancestrales como a la fuerte dependencia agrícola de sus vecinos.

Ahora bien, aunque la parroquia fue el referente diferencial e identitario ligado al culto religioso, el propio edificio o construcción tenía dos partes bien diferenciadas y de alguna forma gestionadas de forma diferente desde una misma titularidad concejil: el recinto sagrado o interior del templo dedicado al culto y los recintos externos, pórtico y torre o campanario. Mientras que el párroco y los dirigentes de la Iglesia tenían potestad en el recinto interior los elementos externos no sólo tenían un uso profano, sino que pasaron pronto a formar parte de la vida cotidiana de la comunidad y de la gestión concejil. Así, mientras que los pórticos se convirtieron en el marco o sala de reunión del concejo, el campanario albergaba las campanas que fueron en el marco de estas comunidades un instrumento que iba más allá del uso religioso al ser el instrumento de aviso a la comunidad no sólo para las reuniones del concejo sino también para notificar la muerte de un vecino, la fiesta o la necesidad de ahuyentar las nubes, pedriscos y otros fenómenos naturales como el fuego. El hecho de

que el acceso al recinto donde se albergan las campanas (campanario) esté abierto y en la parte exterior de los templos y que sea la comunidad concejil la que costee su fabricación sin necesidad de pedir permiso a la institución religiosa, guarda una estrecha relación con la función profana y con el dominio pleno de la propia comunidad vecinal. El refrán popular es impecable : las campanas y el pendón del pueblo son.

En efecto, el pendón es para los pueblos y villas leoneses un elemento clave y fundamental plenamente ligado al poder concejil y a las señas de identidad de cada comunidad. En modo alguno, pues, se pueden relacionar con las guerras medievales ni mucho menos con los señores feudales que como tales no existieron en estas tierras ya que desde la Alta Edad Media los concejos de villas y lugares tuvieron reconocido el poder de autogestión , sus fueros y su propio dominio desvinculado de los señores.

Es, pues, a partir del siglo XV en pleno proceso de desarrollo y autonomía concejil leonesa cuando cada comunidad parece dotarse de estos estandartes directamente ligados a la iglesia y al culto, especialmente al culto mariano, santuarios y romerías surgidos después de la crisis del siglo XV y durante la nueva fase del siglo XVI. El pendón concejil se convirtió en villas y lugares y en este caso en la villa de Castil de Fale en un instrumento más de referencia, autonomía e identidad de la propia comunidad estrechamente ligado a la festividad y a la comunidad vecinal. Las formas, colores y su propia estructura, independientemente de su amplitud incrementada con el correr de los siglos y con las pujas entre los mozos de los diferentes pueblos, guardan una clara y única sintonía relacionada con el Reino de

León y con los colores dominantes en la época en función de las posibilidades de los tintes y de la impronta de los propios reyes leoneses y de la presencia de los musulmanes. Así, mientras que el color verde es el color del Islan dominado en la guerra, rojo, el púrpura y el oro están relacionados con los reyes leoneses, con la reconquista y con la llegada a Castilla de la corte de Felipe el Hermoso que de alguna forma introduce el color rojo en sustitución del púrpura. Por su parte los pendones leoneses van a utilizar una variante del rojo denominado rojo carmesí ya que su color intenso o de sangre o carne se obtenía con las tierras de óxido ferruginoso sacadas en los montes de Hoceja de Sajambre en la montaña oriental leonesa. La utilización de franjas amarillas (oro), caso del de Castil de Fale, están directamente relacionadas con el oro o el premio obtenido en las victorias frente a los musulmanes durante la reconquista.

Bajo estos condicionantes la villa de Castil de Fale se dotó ya en el siglo XVI de su propio pendón vinculado a la parroquia y a los cultos festivos, tales como la romería anual celebrada en la vecina villa de Valdemora o la festividad de San Miguel. Se trata de un pendón de similares proporciones y estructura a los del resto de las tierras leonesas, aunque con disposiciones en cuanto a los colores diferentes. Mientras que el villas cercanas como Valdemoro o Fuentes combina franjas rojas (rojo carmesí) y verdes, el de Castil de Fale alterna en sus franjas horizontales de color rojo carmesí varias franjas de menor tamaño a modo de bordura de color amarillo (oro). El número de franjas siempre ha de ser impar con el fin de poder doblar el paño y que coincidan las franjas del mismo color.

## **2.4 Concejo , comunidad vecinal y formas de actuación.**

### **Ante el conflicto: todos a una como Fuenteovejuna.**

Posiblemente uno de los lazos que de alguna forma más unió al conjunto vecinal de estas villas o comunidades concejiles fue la necesidad de actuar de forma coordinada y comunitaria frente al forastero y a los ataques que los poderosos, e incluso el propio estado, lanzaba contra la propia comunidad, sus recursos e intereses económicos. A través de la documentación notarial y de los poderes concejiles, conocemos las formas de actuación colectiva y la socialización que estas comunidades hacen de todas las causas que tienen que ver con sus vecinos a título privativo y a título colectivo.

En este contexto histórico en el que, sobre todo en la Edad Media los señores poderosos intentaron adueñarse del poder local y de forma especial de la tierra y recursos naturales no privativos, se entiende que las comunidades concejiles se vinieran (hermandades, concejos mayores, etc) o en el caso de estas villas del sur intentasen mantenerse unidos bajo la cobertura jurídica de la institución concejil como la mejor forma de actuar frente a los ataques externos. El hecho de que a diferencia de otros territorios castellanos aquí converjan tanto los intereses de los vecinos ricos como los de los pobres parece justificado en un marco rural de pequeñas comunidades que a priori están indefensas demográfica y económicamente ante los poderosos por mucho que existan ya cauces jurídicos y unos altos tribunales que imparten justicia en nombre del rey. Pero, nada más lejos de la realidad ya que si bien lo reducido de las comunidades y villas leonesas en cuanto a sus vecinos podía ser un factor negativo a la hora de plantear un

conflicto y autodefenderse, se convirtió en la práctica en un elemento potenciador de la lucha, de la concienciación de esas limitaciones y de que sólo a través de la unión y de la conjunción de intereses podían seguir teniendo capacidad de autogestión y dominio sobre los recursos naturales. Sólo desde estos planteamientos y situaciones se puede entender que los territorios leoneses, con las comunidades concejiles, villas y comunidades de aldea más pequeñas, sean los más litigantes de toda la Corona de Castilla, tal como demuestra y se reconoce en la Chancillería de Valladolid.

A partir del siglo XV tanto estas villas cerealeras como las aldeas de montaña, plenamente organizadas inician un largo camino de conflictos colectivos que dirigidos por la institución concejil fueron dirigidos principalmente contra los señores jurisdiccionales, contra los otros concejos o contra los propios vecinos que no acataban las normas concejiles. Mientras que los pleitos concejiles planteados contra los señores hasta el siglo XIX iban dirigidos a frenar su intento por conseguir el poder político local y por el dominio territorial y de las rentas, los pleitos entre los concejos van a surgir por los derechos de pastos y otros recursos que poseen las comunidades colindantes.

Planteado el problema se reúnen convocados a son de campana tañida, la justicia ( juez ordinario) el regimiento( los regidores concejiles) y los vecinos en concejo a fin de plantear la correspondiente denuncia o querella y dar poder a sus representantes y procuradores para que actúen en su nombre ante los tribunales: Chancillería de Valladolid o Real Adelantamiento de León. Es en el concejo donde se dan los plenos poderes y se decide sobre cuando abrir, parar o finalizar un pleito, siendo

normal que los concejos en función de los recursos disponibles pasara los conflictos de generación en generación o los abriese en función de su situación vecinal, tal como hace el concejo de la villa de Castilfalé que iniciando el pleito a principios del siglo XVI contra el señor, marqués de Castrufuerte, lo mantiene hasta el siglo XIX y todo por el dominio y la titularidad del monte y dehesa de la villa. Sin embargo, las villas de Fuentes y de Carbajal al contar con un número reducido de vecinos y al no disponer de un pleno dominio sobre los bienes comunales se vieron obligadas a mantener la situación hegemónica de sus respectivos señores, lo que justifica que el conde de Paredes, señor de Carbajal sea el dueño directo de la mayor parte del terrazgo labradío. Los propios vecinos y concejo de Fuentes en 1802 envían una carta poder al rey solicitando rebaja de impuestos ante la calamidad de los tiempos y porque no llegan los vecinos a una treintena.

Ahora bien, si esta alta conflictividad concejil tuvo una razón de ser en base a la capacidad de autogestión de estos concejos, el dominio y posesión de recursos concejiles y comunales fue fundamental para poder defenderse y pleitear ya que la justicia era cara y para ello había que poseer un dinero del que carecen las comunidades concejiles. Esto hace que tengan que recurrir a las instituciones y grupos rentistas a pedir dinero para pleitear a base de constituir censos y pagar los correspondientes intereses por el capital prestado. El hecho de que mientras se pagasen los intereses no había obligación de devolver el capital (3% de interés), hace que los concejos pasen la deuda censal de generación en generación y así a finales del siglo XVIII más del 80% de los pueblos y villas leonesas estaban pagando intereses por los capitales censales pedidos por sus antepasados.

Ahora bien, para obtener esos capitales y pagar los réditos los concejos hubieron de hipotecar los bienes concejiles y comunales y pese a que la ley les obligaba a pedir permiso al rey, casi nunca lo hicieron y por su cuenta en pleno concejo acordaban las tierras y recursos que hipotecaban. Cuando no llegaban estos recursos cada vecino en concejo hipotecaba la casa o una tierra individualmente desde el convencimiento de que caso de no pagar o devolver el capital , el rentista prestamista lo iba a tener muy difícil a la hora de ejecutar una deuda y dejar a todos los vecinos sin casa. En las propias escrituras notariales los vecinos en concejo dicen: *nos obligamos con nuestras personas y bienes habidos y por haber y con los bienes de nuestro concejo*

### **3. COMUNIDAD Y RECURSOS CONCEJILES. COLECTIVIZACION DE LO PRIVADO, PRIVATIZACIÓN DE LO PUBLICO. QUIÑONES Y SENARAS.**

#### **3.1. La organización del medio y la distribución de los recursos.**

Desde el inicio del proceso repoblador altomedieval en torno al cual se van a crear o reconstruir buena parte de las villas y lugares de las tierra llanas del Reino de León cada comunidad fijó sus respectivos términos o espacios territoriales en los que la tierra quedaba repartida entre la tierra privativa y la comunal o concejil. La presencia de tierras roturadas y de espacios vírgenes obligaba a ordenar y distribuir los aprovechamientos en función tanto del calendario agrícola, como de las necesidades de una cabaña

ganadera vacuna y ovina que era indispensable para las actividades agrícolas.

En este contexto y dado el sistema de reparto del terrazgo labradío en pequeñas parcelas o trozos cuya media difícilmente superaba los mil metros cuadrados, los vecinos difícilmente podían actuar sobre sus tierras sin el previo acuerdo y consentimiento del resto de la comunidad. A través de la institución concejil y de las normas consuetudinarias los espacios tanto labradíos como vírgenes eran sometidos a una fuerte reglamentación que regulaba tanto los tipos de cultivo como las hojas de los pagos o bagos a fin de que se pudiese acceder a las fincas y de que los ganados pudieran aprovecharse de ellas una vez levantado el fruto.

En este mismo orden el concejo garantiza el cuidado y conservación de los frutos y bienes privativos a cambio de esa cesión temporal de aprovechamiento a favor de la comunidad. A partir de aquí y de estas limitaciones en el marco de la actuación individual o vecinal, el control concejil sobre la cabaña ganadera y determinadas especies está directamente relacionada con la disposición de recursos, con el tipo de economía y con las necesidades de la cabaña. En el caso de Castil de Fale su concejo, pese a lo limitado de los recursos, mantuvo hasta el siglo XX un férreo control sobre los espacios y recursos concejiles de entre los que destacan aquellos destinados al sostenimiento de la cabaña ganadera. Ante la inexistencia de praderas el monte y la dehesa se convirtieron en el medio fundamental y básico para mantener la cabaña ovina y sobre todo vacuna indispensable para el desarrollo agrícola. Por su parte la villa contó con un amplio término de más de cien cargas (Has.) roturado y entregado en quñones a los vecinos en el que sembraron cereal a partir de que en el siglo XVI

fuese roturado y aprovechado mediante senaras concejiles, aún a costa del reconocimiento y foro que hubieron de pagar hasta el siglo XIX al marques de Castrofuerte.

En este mismo orden la villa dispuso de algunas casas destinadas a la carnicería, la fragua concejil, la cárcel y la taberna, lo que parece justificar el monopolio que hasta el siglo XIX mantuvieron sobre los principales abastos de productos básicos, a la vez que el concejo mediante el arriendo obtenía importantes ingresos con los que abordar el pago de los impuestos reales.

### **3.2. Los trabajos colectivos. Facenderas y senaras**

Dada la fuerte presencia del minifundio, de la pequeña propiedad y de los espacios comunales, no era fácil el ordenamiento del territorio fuera del marco de actuación comunitario. Cada lugar y cada villa tiene, como ya hemos visto, pleno control sobre todo el espacio que está dentro de su término. Este término se halla perfectamente delimitado por los fitos, mojones o arcas concejiles que son supervisadas cada año por los gobiernos de cada concejo. El concejo cada año tiene la obligación de salir a campana tañida a levantar las arcas, que tenemos obligación de levantar en los términos nuestros y de nuestros vecinos, pena de que el año que quedasen por levantar por culpa o descuido de los alcaldes paguen de pena doscientos maravedis para gastos de concejo. El corrimiento de estas arcas y límites, especialmente en aquellos lugares en los que se toma como referencia los ríos, es motivo durante toda la Edad Moderna de frecuentes pleitos entre los concejos. Esto pone de manifiesto la

importancia que durante siglos tuvo para los concejos leoneses el conservar la territorialidad y dominio sobre el término.

Ahora bien, dentro de cada término el espacio queda dividido a nivel de dominio en privativo y en comunal. El privativo hace referencia a la tierra tanto de los vecinos y forasteros campesinos, como de los otros grupos sociales rentistas, burguesía urbana, clero y nobleza, mientras que el de titularidad concejil se considera comunal cuando es utilizado comunamente por los vecinos y de propios cuando habiendo sido roturado se cultiva, bien por los vecinos, bien mediante arrendamiento o privatización de uso. Mientras que en las comarcas leonesas de la mitad sur, más ligadas al desarrollo de las actividades agrícolas, presentan un mayor porcentaje de espacio privativo, en el norte, en la Montaña, la hegemonía del espacio no labradío y comunal es clara, pese al dominio que la nobleza señorial logra alcanzar en los denominados puertos de merinas.

Sin embargo y pese a estas importantes diferencias que dividen la provincia en zonas ganaderas por excelencia y agrícolas, el funcionamiento de las comunidades concejiles y la capacidad de gestión y formas de actuación colectiva sobre el espacio o término son muy idénticas. Esto demuestra que en sus orígenes tanto los fueros leoneses, como la repoblación se hizo bajo unas mismas directrices y sobre unas comunidades concejiles perfectamente organizadas, libres y con un fuerte dominio sobre el medio. En este contexto y bajo los condicionantes estructurales, la organización tanto de los espacios labradíos privativos, como los comunales, requieren una acción conjunta y un compromiso vecinal bajo las directrices del concejo. Tanto el desarrollo de la actividad agrícola, como la ganadera, estrechamente ligadas e interdependientes,

difícilmente se podía llevar a cabo fuera del marco del concejo y de la acción colectiva. Los trabajos colectivos en sus diferentes variables dan buena cuenta de esta necesaria acción conjunta y de ahí que las ordenanzas en todos los casos intenten regular la temporalidad y tipología de los trabajos en torno a la actividad rural y a los ciclos agrícolas.

En primer lugar, las denominadas facenderas constituyen un marco de identidad y referencia de las comunidades, pueblos y villas, leonesas. Como cualquier otra actividad comunitaria, las facenderas representan la actuación conjunta, regulada y dirigida por el concejo y por los gobiernos concejiles. Se entienden como un deber y un servicio que la comunidad presta a sus vecinos, sin las cuales se rompería el equilibrio y el orden de la actividad agraria. Cada concejo marca cada año las fechas y cometidos fijos para los cuales los gobiernos han de reunir las facenderas. Pero, estas actuaciones colectivas, ligadas fundamentalmente a determinados usos agrícolas, también se encuentran en estos y otros cometidos y bajo las mismas imposiciones en la montaña. Las ordenanzas son tajantes al ordenar que el vecino que no tenga casa abierta y que no asista a las facenderas del concejo y al pago de las contribuciones, no tiene derecho a reclamar los derechos y cáñamas que corresponden al resto de los vecinos. Por su parte, el ordenamiento es claro al mandar que los alcaldes han de señalar un día para hacer los regueros de concejo, regueros, puentes, caminos y otros cualesquier reparos tocantes al bien común del dicho concejo y que tengan todos obligación de ir, y el que habiéndose reparado dos pasadas no hubiere llegado, pague de pena por cada vez dos cuartos.

Aunque en muchos pueblos no se especifica tanto la presencia de mujeres, como de menores está prohibida en las facenderas y a veces son las propias ordenanzas las que fijan las condiciones mínimas de participación. Sólo los varones vecinos cabezas de casa pueden acudir a la facendera y si no lo hacen deben de enviar a persona capacitada para trabajar, e se entienda que se a mozo de diez y seis años arriba, y el que no fuere pague de pena dos azumbres de vino para el concejo.

Las facenderas, pues, son entendidas por cada concejo como un servicio necesario de ahí que se hagan extensivas no sólo a determinadas tareas relacionadas con la agricultura, sino también con la conservación del propio medio.

### **3.3. Quiñones, suertes y senaras. El aprovechamiento y privatización de los recursos comunales.**

En una línea similar y dentro del colectivismo que impregna la vida de estas comunidades, la denominadas bouzas o senaras se mantienen como auténticos testimonios de colectivismo y de acción concejil sobre el medio tierra. Relacionadas con las sernas o trabajos colectivos medievales, las senaras se conservan en muchos pueblos leoneses bajo la clara influencia del comunitarismo agrario y de la importante presencia de los recursos comunales.

La plena capacidad que tienen los concejos a la hora de utilizar sus espacios comunales hace que, pese a la necesaria petición de licencia al rey para cambiar determinados usos, los concejos actúan en función de sus intereses y bajo la presión de la

necesidad de tierra para roturar. A lo largo de la Edad Moderna existe un lento proceso de roturación que se acelera en coyunturas expansivas y bajo la presión del crecimiento vecinal. No obstante, los concejos son conscientes de la necesidad de mantener el equilibrio y de la importante función que cumplen los espacios no roturados de aprovechamiento colectivo. De la importancia de estos espacios dan buena cuenta las ordenanzas y el férreo control que imponen a su utilización. Una de las formas de aprovechamiento colectivo se sitúa bajo el nombre de senaras en tanto en cuanto el concejo fija el espacio de tierra roturado que ha de ser cultivado con cereal de forma colectiva por la comunidad. Una vez recogido el grano cada año el producto se destina para pagar las cargas concejiles y el sobrante se reparte entre los vecinos del concejo.

A partir de este origen en las tierras cerealeras de Campos en torno a Valderas y en las villas de Fuentes , Carbajal, Castilfalé, Valdemora, etc. a partir del siglo XVI los espacios de tierra roturados que se mantuvieron bajo dominio de sus concejos o que pasaron a dominio de los señores jurisdiccionales, se entregaron a los vecinos de forma permanente bajo la denominación de senaras o tierras en su día fueron de aprovechamiento comunitario o concejil, lo que hizo que en estas zonas en las comunidades se diferencien los vecinos por ser labradores propietarios y arrendatarios o ser senareros, es decir, antiguos jornaleros que como vecinos sólo trabajan este tipo de tierras y pagan la correspondiente tierra, pese a que tiene pleno dominio del útil ya que la pueden transmitir de padres a hijos. Esto explica que en los catastros estas tierras y sus ingresos no figuren

como bienes de propios de los concejos, sino como bienes comunales.

Por contra, a lo largo de los siglos, otra parte de la tierra virgen de dominio comunal, fue utilizada por los concejos para repartirla entre los vecinos, especialmente en los momentos de mayor demanda. Cada vecino recibía un mismo lote de tierras o quiñón, bien roturado o sin roturar, para que lo trabajase manteniendo el concejo la titularidad. Estas heredades de tierra, denominadas quiñones, almas, etc., tienen diferentes formas de cesión: una temporal, cada cuatro años y en rotación por los diferentes vecinos y otras a más largo plazo. Es frecuente que el nacimiento de un hijo sea compensado por el concejo con la asignación de un trozo de tierra comunal para que sea roturado y trabajado por el padre hasta que el hijo sea mayor de edad. Esta cesión que recibe el nombre de alma o quiñón, en determinadas a partir del siglo XVIII se convertía en definitiva o de por vida, lo que hizo que una parte del terreno comunal roturado y transformado en propios, en la práctica quedará repartido gratuitamente entre los vecinos, mientras que la titularidad sigue siendo del concejo.

Desde esta misma filosofía colectivista, los concejos leoneses cada año compensan a sus vecinos con el reparto de determinados aprovechamientos y usufructos que vienen a complementar los recursos personales de cada vecino. Bajo el control directo del concejo cada año se reparten entre los vecinos suertes o quiñones de leña bajo determinadas condiciones que persiguen la defensa y conservación del bosque o del monte. Lo limitado de los recursos naturales y la necesidad de conservarlos como un medio básico de reproducción de las comunidades obliga

a los concejos de los pueblos leoneses a mantener a lo largo de toda la Edad Moderna unos criterios generales guiados por la sola utilización de aquellos recursos que cada año necesita la comunidad. Las penas impuestas a los forasteros y las prohibiciones a la exportación y saque de estos recursos naturales fuera de la comunidad está fuertemente penada por el ordenamiento concejil. Es en los concejos de la montaña a priori con mayor potencial de estos recursos donde las ordenanzas son más específicas a la hora de utilizar y conservar los recursos naturales. Esto se debe a la importancia que estos tienen para sus economías y al sistema de plena colectivización que mantienen y aún conservan hoy los concejos.

Es, pues, el concejo el que fija el tiempo y la cantidad de leña y otros aprovechamientos que pueden disfrutar los vecinos. Así, el concejo permite a cada vecino *traer un carro de hoja cada día de S. Miguel de cada año, por convenir así para la conservación de los ganados menudos mediante la rigurosidad de los inviernos y no poder salir con muchas nieves. Si se exceden paguen por cada carro una cántara de vino*. En este mismo orden de redistribución limitada de los recursos se ordena que *ningún vecino pueda hacer al año más de cuatro carros de cal con la leña de la villa, pena de dos cántaras de vino, y si hiciere más cal ha de ser con la leña de fuera parte comprada en otros términos forasteros*.

Esta misma fórmula de control concejil y de utilización de los recursos naturales la encontramos en otros aprovechamientos como el agua. El agua es por naturaleza el recurso que mayor grado de conflictividad generó a lo largo de la historia leonesa. Los múltiples cursos fluviales o ríos denominados

caudales con los que cuenta la provincia la hace ser una de las más ricas en recursos hídricos de España y de ahí la importancia que tiene el control y la utilización del agua. En lo que hace referencia a los cursos fluviales, el dominio sobre el agua la comparten los concejos por los que transcurren los cauces y los titulares de otros derechos referentes principalmente a la molienda y al riego. Frente a los derechos reconocidos de grupos rentistas vinculados generalmente a la industria molinera, son los concejos los que distribuyen y controlan el agua de sus términos y en sus usos.

Ese control de los concejos comienza con la labor de las facenderas concejiles a la hora de la limpieza de las molderas y regueros concejiles, así como de la conservación de las presas o puertos a través de los cuales se saca el agua del río caudal. A veces, los pueblos y sus concejos compran a otros concejos los derechos de agua sobre fuentes que van a los ríos o sobre el propio cauce. Así pues, al no existir una política hidrológica, son los propios concejos ribereños los que han de velar por sus derechos históricos y porque la distribución del agua, especialmente en las zonas con mayor imposición de la agricultura de regadío, sea más equitativa. Partiendo de una plena propiedad colectiva sobre el agua, cada concejo mantiene e impone unas normas reguladoras que en la mayor parte de los casos no se escriben ni en las ordenanzas, sino que son heredadas como un derecho de uso consuetudinario. Dado que el espacio productivo está dividido en hojas y en praderías comunales, la utilización del agua para riego se hace desde el establecimiento de prioridades y a través de las denominadas suertes.

## **4.COMUNIDAD Y COMPORTAMIENTOS SOCIALES.**

### **4.1 Matrimonio y familia: asunto privado, participación colectiva.**

El matrimonio como acto de constitución de una nueva unidad familiar en el seno de estas comunidades concejiles no era solo un asunto personal o de familia. Por el mero hecho de pertenecer a una comunidad vecinal, la formación de una nueva familia y de un nuevo hogar daba derecho a alcanzar la vecindad, pues sólo desde esa condición los varones cabezas de casa podían participar como miembros de pleno derecho en las reuniones de concejo.

La implicación de la nueva unidad familiar en cuanto a deberes y derechos en la vida y gestión de la comunidad vecinal legitima al propio concejo de vecinos a la hora de intentar participar en un asunto de familia tan importante como la boda por la cual se consuma el matrimonio. Desde ese aspecto plenamente integrado en el comunitarismo vecinal, la boda de cualquier hijo o hija de un vecino implicaba unos deberes o compromisos para con la comunidad, de ahí que en muchas ordenanzas sea el propio concejo quien especifique la naturaleza y la cuantía de estos. Así, se manda que el regidor o alcaldes de concejo estarán obligados a cobrar los derechos que deben de pagar las mozas solteras y mujeres viudas que se amonestasen para casarse en su iglesia. Estos deberes se resumen en una cántara de vino y media arroba de pan cocido *y si no lo cobrasen las saque nuestro concejo en prendas.*

Es muy frecuente que cualquier hijo de vecino que se casare ha de dar y pagar al concejo diez azumbres de vino, mas a cada vecino dos libras de pan blanco y dos sardinas y cualquiera hija de vecino que se casare y saliere a vivir fuera del lugar pague a dicho nuestro concejo media cantara de vino y el que estando viudo casase con doncella pague una cantara de vino y casado con viuda pague media cántara.

Estos y otros muchos ejemplos ratifican la capacidad de intervención de los concejos y de la comunidad vecinal a la hora de obligar a los nuevos esposos a hacer partícipe a toda la comunidad vecinal en una nueva y clara manifestación de comunitarismo.

#### **4.2. Comunidad, concejo y solidaridad: la solidaridad de los vivos, la solidaridad de los muertos.**

El comportamiento y las actitudes de las comunidades concejiles leonesas resulta harto difícil de entender fuera del marco estructural en el que se desarrollaron durante siglos. Desde esa base estructural, el fuerte protagonismo de la comunidad es causa y a la vez consecuencia de la fuerte interdependencia de sus miembros, de los vecinos que la componen. En su seno cada individuo, cada vecino, tenía pocas posibilidades de desarrollarse al margen de la comunidad y del concejo, por lo que las interdependencias mutuas se convierten en uno de los pilares básicos de las relaciones vecinales.

La necesidad de una acción colectiva, las interdependencias mutuas y las escasas posibilidades de autosubsistencia al margen de los deberes y derechos marcados por cada concejo o comunidad concejil fuerzan a un conjunto de solidaridades que, aunque

impuestas, están plenamente arraigadas en estas comunidades, al margen de la confrontación interna o vecinal. Desde la perspectiva económica una de las primeras solidaridades extendidas por el conjunto del territorio leonés está relacionada con las desigualdades sociales y con la propia economía familiar. La pérdida de una cabeza de ganado mayor suponía para buena parte de las explotaciones familiares un duro golpe que necesitaba una acción conjunta vecinal.

Pero, las limitaciones económicas y sociales, incluso en las capas sociales con más recursos, ponen al individuo y a la unidad familiar, que le representa en el seno de la comunidad, en una tesitura por la que en aquel contexto de limitaciones económicas necesita de la comunidad vecinal incluso para poder reproducirse como tal. Ante las limitaciones y crisis agrarias es comprensible que sea la comunidad vecinal y en conjunto la mayor parte de vecinos senareros y jornaleros los que en 1755 en conjunto soliciten trigo y suscriban contratos de obligaciones a fin de poder comer y reproducirse desde el convencimiento de que unidos no sólo tienen más posibilidades de conseguirlo, sino que los riesgos son menores caso de no poder hacer frente a la devolución o al pago del grano.

A su vez, la carencia espacio y de medios con los que fabricar la casa por parte de algunos vecinos y desde la necesaria compensación a fin de que no trastoque la armonía social parece estar detrás de importantes prácticas concejiles por las que se le entrega a vecinos que lo soliciten, careciendo de él, terreno comunal y madera para construir y reparar sus casas. Es frecuente que *si algun vecino pidiese suelos para la casa en concejo, el concejo o la mayor parte de él se los pueda dar donde no haga*

*agravio y sin pedimento, con que en el tiempo de dos años edifique en ellos y morando dentro de tres años y si no mora los devuelva al concejo.* En este mismo orden, cuando un vecino pide madera para su casa los regidores y el procurador tienen obligación de dársela, una vez vista su demanda y la madera que fuere demandada la pondrá en obra dentro de aquel año, pena de dos cantaros de vino. Y si por su omisión se la hurtaren de las dehesas o se perdiere no se le de otra para aquella obra.

En un contexto similar al anterior, muchos concejos de la montaña leonesa y de otras comarcas en las que la tierra labradía es minoritaria obligan a sus vecinos a desarrollar determinadas prácticas agrícolas a fin de que cada uno tenga los medios necesarios para alimentarse y evitar conflictos por robos. La obligación de los vecinos de plantar cada año un huerto de berzas y hortalizas ha de entenderse desde esta óptica y necesidad especialmente cuando se ordena que cada vecino tenga obligación de tener un huerto para todo género de verduras para el gasto y consumo de su casa y el que no tuviere sitio propio para ello se lo de el concejo y si no pone dichas verduras le castigue a su voluntad. Es frecuente que quien quiera pueda hacer un huerto en los campos de concejo por espacio de tres años y pasados estos lo tenga que abrir y no lo debe de hacer donde perjudique al concejo y el que no plantare berzas para el consumo de su casa ha de pagar media cántara de vino.

No obstante, es en el tema ganadero y desde la importancia que tiene la cabaña mayor para el desarrollo de las explotaciones agrícolas donde se aprecian un mayor intervencionismo concejil. La pérdida de una cabeza supone un importante contratiempo que en parte aparece subsanado en todas las comunidades campesinas

leonesas mediante la propia solidaridad vecinal. Es entre las comunidades agrícolas de vegas y páramos entre las que tienen un mayor asiento estas prácticas solidarias tendentes a hacer pagar a la comunidad la res accidentada y muerta en la vecera. Así, mientras que la carne de los bueyes desgraciados se ha de consumir entre los propios vecinos pagando la parte que les corresponde al dueño, también se manda que si en el baquero sucediese alguna desgracia de herir alguna cabeza de ganado a otra, el guarda sea obligado a declarar quien la hirió y si no lo dijere sea creído la tal guarda, siendo mayor el varón de catorce años y la hembra de doce con solo su juramento, sin mas averiguación, porque al buen gobierno del lugar conviene porque no se pierda la hacienda de algún pobre se declara que la cabeza del ganado que así se hiriese y no tuviere cura que el concejo en tal caso sea obligado a matar y repartir por los vecinos del lugar a cuatro libras de carne a cada vecino pagándosela al dueño a como valiere en la carnicería del lugar.

Pero, estas actitudes sociales y comportamientos vecinales van más allá de las meras cuestiones económicas y se adentran en el campo sociológico y cultural. Estas formas y solidaridades son la mejor muestra del arraigo de un pasado en el que el comunitarismo agrario y el colectivismo guiaron en buena medida el desarrollo de estas comunidades. Esto no sólo se demuestra en las actuaciones colectivas, facenderas o sanaras, sino también en algunas prácticas donde en sus ordenanzas la obligación de los vecinos de recoger la mies, siega y trilla, mediante facendera a los que estando enfermos no puedan hacerlo a fin de evitar que se pierda y con ello se le produzca un grave daño al vecino. Es difícil de entender esta ordenanza que alcanza los mayores niveles de solidaridad y de comunitarismo sin entender la dinámica de estas

comunidades concejiles y el fuerte arraigo de sentimientos colectivizadores.

En este mismo orden el sentido colectivista de cada comunidad va más allá del reconocimiento que el concejo tiene y asume sobre la privacidad y los derechos privativos de cada vecino en tanto que no sólo se respetan los derechos privativos, sino que se garantizan a partir de reconocer la propiedad privada y los derechos individuales o familiares a la hora de disponer de recursos y de desarrollar una actividad productiva. Sin embargo, mientras que el concejo hace de garante de los derechos familiares o vecinales, impone una serie de condicionantes que de alguna manera limitan la libre disposición vecinal de sus propios recursos o sobre todo de aquellos que necesitan de la implicación comunitaria para su desarrollo. Esto explica que las ordenanzas impidan a los vecinos la venta y capa de determinadas especies de ganado, incluido el de cerda, hasta que los veedores del concejo no hayan elegido los ejemplares que han de servir de padres para el conjunto de la cabaña de la comunidad. Esta limitación del disfrute de los recursos privativos se hace extensiva a todas aquellas actividades en las que el interés de la comunidad o de los más desfavorecidos está en juego en base a que es la propia comunidad concejil la que garantiza a cada vecino el disfrute de los bienes de producción hasta que haya recogido el fruto de su esfuerzo personal. A partir de aquí, la comunidad concejil exige la pérdida de los derechos individuales en aras de la comunidad.

Pero, estas prácticas solidarias relacionadas con la vida y el devenir diario de las comunidades vecinales van más allá de lo cotidiano y alcanzan otras dimensiones en clara relación con la muerte. Es en el momento de la muerte cuando nuevamente la

comunidad se reconoce como solidaria y comprometida al participar de forma colectiva en los sentimientos familiares e individuales. En todas las ordenanzas concejiles leonesas están perfectamente regulada la obligación de los miembros de la comunidad de acompañar a los vecinos difuntos hacia su última morada e incluso en la propia enfermedad terminal. Así parecen entenderlo los concejos cuando en sus ordenanzas mandan que cuando hubiere algún enfermo en el lugar el procurador, avisándole, tenga obligación de mandar a los vecinos la vez hasta que muera o viva y si no lo hiciere el dicho procurador pague de pena dos reales y al que se lo mandare si no lo hiciere pague un real y lo mismo se entienda con los difuntos. Y cuando hubiere cuerpo muerto mayor ningún vecino uña buey hasta que se de el cuerpo a enterrarle, pena de dos reales por la primera y uno por la segunda.

Así pues, la muerte de un vecino paraliza la actividad de la comunidad ya que el resto de los vecinos están obligados a asistir y velar su cuerpo hasta que sea enterrado. Posiblemente la importancia de esta solidaridad hace que todas las comarcas leonesas las ordenanzas son recogen esta obligación: que cuando hubiere algún difunto en este dicho lugar, vecino hombre o mujer para sepultar, ningún vecino trabaje hasta que el cuerpo sea sepultado y el que por hacerlo deje de asistir a ir a sacar el cuerpo de casa y al entierro pague medio real y esta pena la ejecuten los regidores.

#### **4.3. Actitudes sociales, actitudes morales y religiosas.**

La capacidad de control que los concejos tienen sobre los vecinos y la sumisión de estos al interés colectivo y a las normas consuetudinarias quedan perfectamente reflejadas en determinadas pautas de comportamiento que recogen las propias ordenanzas. El papel que juega la mujer en el contexto de la comunidad vecinal, aunque relegada del concejo, es muy importante en el seno familiar, de ahí que la condición de mujer casada requiera un respeto por parte de la comunidad. Es frecuente que a través de las propias ordenanzas y de la vía punitiva las comunidades o concejos pretendan imponer ese respeto debido mediante la utilización de símbolos o ropas que diferencien la mujer casada de la soltera, en la misma línea de los símbolos actuales. En concejos y comunidades de montaña se ordena que la mujer casada que se hallare en la calle sin toca sea castigada en doce maravedis para las venditas ánimas. Incluso y en estos mismos términos de intervención algunos concejos controlan la presencia de personas ajenas a la comunidad al ordenar que ningún vecino pueda tener estudiantes en su casa, menos que sean hijos, hermanos, sobrinos y primos y estos hayan de ser de buena vida y costumbres y precediendo licencia de este concejo y no lo haciendo así pague cualquier vecino que los tuviese por la primera vez doscientos maravedis y por la segunda lo que el concejo arbitre, por excusar los muchos pleitos que pueden ocasionar con los vecinos como ha sucedido en los años anteriores.

Ahora bien, es en determinados aspectos relacionados con la religiosidad y con las advocaciones del santoral donde nuevamente se deja ver la impronta del comunitarismo y del poder

concejil sobre el vecindario. Tanto los ciclos agrícolas como muchas de las actuaciones de cada comunidad rural marcaron unas pautas temporales fijadas tradicionalmente por la festividad o el santoral. Si es en S. Juan de Junio o el día de Año Nuevo o el día de S. Silvestre cuando se ordena, como vimos que se elijan los cargos concejiles, o por Nuestra Señora de Septiembre cuando se pagan las rentas o Por S. Martín cuando se han de hacer determinados trabajos colectivos, cada concejo tiene asignados determinadas celebraciones y fiestas denominadas votivas que hunden sus raíces en la vieja tradición y en la impronta que tiene la religiosidad popular y los santos protectores en el seno de estas comunidades tradicionales. Las fiestas y misas votivas del concejo son sufragadas por este y todos los vecinos están obligados a asistir.

Esta práctica totalmente extendida entre todas las comunidades concejiles queda reflejada en los gastos corrientes de las haciendas locales concejiles, especialmente a través de las penas vinales y del arriendo de la taberna. La búsqueda de protección para las personas, ganados y bienes está detrás de estas prácticas concejiles, especialmente vinculadas a los santos locales protectores y a las rogativas y bendiciones de los campos durante el mes de Mayo. Toda esta religiosidad popular aceptada y sostenida por los concejos viene a demostrar que pese a la progresiva imposición de la religiosidad oficial de la Iglesia Católica, los concejos leoneses mantuvieron vivas las creencias y prácticas de sus ancestros, tal como se refleja en las principales advocaciones que presiden las iglesias parroquiales y los diferentes cultos y altares existentes en su interior como símbolo de su autonomía e identidad. Cada lugar, cada villa o cada comunidad

concejal tiene su propia iglesia. Junto a ellas toda una plétora de ermitas de advocación mariana y de otras advocaciones más relacionadas con el culto popular como Santa Brígida, Santa Marta, Los Santos Mártires, S. Antón, etc,. Si bien es cierto que la mayor parte de las iglesias que llegan hasta nuestros días se construyen a reforman durante el siglo XVIII, coincidiendo con la importante fase agrícola expansiva de la primera mitad de dicho siglo, no lo es menos que ya desde la Edad Media estas comunidades tuvieron en sus ermitas, iglesias y devociones un importante medio de afirmación social y religiosa, presidido siempre por su plena autonomía y dominio concejil.

En efecto, la advocación de San Miguel se convierte en las villas como Castil de Fale o Fuentes y Carbajal en un marco de referencia festivo en los inicios del mes de Mayo y de las festividades y ciclos agrícolas primaverales, de la misma forma que la festividad de San Isidro se enmarca en una clara manifestación de religiosidad popular ligada a la actividad agrícola y a la presencia de unas comunidades en las que el predominio de jornaleros y campesinos guardan estrecha relación con el dominio de señores y rentistas. Ahora bien, pese a estos condicionantes ambas villas contaron durante siglos con dos templos parroquiales de referencia concejil que reflejaron los momentos de importante crecimiento y desarrollo del siglo XVI.

## **2.4. LA VILLA CONTRA EL MARQUES: LOS PLEITOS ANTISEÑORIALES Y EL ENDEUDAMIENTO COLECTIVO.**

A pesar de contar la villa a finales del siglo XV con un número de vecinos que en modo alguno alcanzaba el medio centenar, se puede decir que estaba ya plenamente organizada, gobernada por su propio concejo y de alguna forma iniciaba una fase marcada por la etapa anterior y por la crisis económica y demográfica de la primera mitad del siglo XV, fase en la que la despoblación de la villa facilitó la llegada como señor al señor de Castrofuerte y al linaje de los Barba. De todas formas y pese a no poder hacer nada ante tal enajenación los sucesos posteriores nos indican que de alguna forma los vecinos de Castil de Fale pudieron responder a los ataques del señor y a sus intentos de adueñarse del señorío solariego, es decir de la tierra. No obstante, de alguna forma logró el reconocimiento de un fuero o foro de parte de las tierras no privativas roturadas por los vecinos (tierras marías). Pero, a partir de esos momentos el problema se planteaba sobre los bienes y tierras no roturadas o concejiles y en especial sobre el monte y la dehesa, así como otras tierras roturadas y praderías.

Entre 1490 y 1504, los problemas y luchas contra los señores que se intentaban adueñar de estas comunidades son constantes de la misma forma que lo son los enfrentamientos entre los señores: conde de Valencia, marqués de Astorga, conde de Benavente. En este contexto los problemas para la villa de Castilfale parecen reabrirse en 1527 una vez que la nobleza y en especial Pedro Barba, su señor, victorioso de las Comunidades y una vez que ha superado la defenestración regia por no participar en la guerra de

Granada, obliga de alguna forma a los vecinos a nuevos reconocimientos y de forma especial les exige el reconocimiento del dominio del término de la villa. En la demanda que el concejo y vecinos le interponen ante la Chancillería de Valladolid le acusan de *haberse introducido y apropiado con la mano y poder de tales dueños de todos los términos de esta villa... En el pleito se le condena a que no impida a los vecinos aprovecharse de todos los términos públicos concejiles, a excepción del monte alto y tierras marías* .

A partir de aquí se inicia una larga fase que va a durar casi tres siglos de pleitos y confrontación señorial en la que el concejo y vecinos de Castil de Fale, pese a ser la mayor parte pobres y jornaleros se dan cuenta de la fuerza que pueden tener y de la importancia que para ellos y las generaciones futuras van a tener unos terrenos vírgenes y roturados que hay que defender como sea y desde el adeudamiento colectivo constante. A través de las siguientes reseñas documentales, de documentación fotocopiada y en el A. D. se puede seguir este alto grado de conflictividad social por parte de una pequeña villa frente a señores poderosos e influyentes en la corte.

RELACIÓN DE PODERES CONCEJILES DADOS POR LA JUSTICIA, CONCEJO Y VECINOS DE LA VILLA DE CASTILFALE PARA PLEITEAR ANTE LA CHANCILLERÍA DE VALLADOLID CONTRA EL SEÑOR: MARQUES DE CASTROFUERTE.

AÑO	MOTIVO
1527	Pedro Barba intenta apropiarse de todos los términos de la villa. Ines de Guzmán, viuda, y sus causantes se apropia con la fuerza de su poder de las tieras y téminos de la villa.El pleito lo gana el concejo y sólo se le reconoce lo que había logrado en el siglo XV: el monte alto y las tierras roturadas denominadas marías.
1556	Ines de Guzman viuda de Pedro Barba pleitea con los vecinos de Castil de Fele porque le niega el derecho a vender sus propias tierras.
1557	El concejo de la villa obtiene una ejecutoria real por la que se le reconoce que el término es público y concejil, mientras que al señor de Castrofuerte se le reconocen los derechos sobre las tierras marías labradas desde antiguo.
1564	El concejo de Castil de Fale pleitea contra el señor ante la querella interpuesta por este al acusarle que se opuso a que el señor arrendase al Bachiller Beltrán Martínez las tierras marías reclamadas por los vecinos y usurpadas en el siglo anterior por el señor.
1565- 1574	Durante nueve años el concejo pleitea contra el señor. El señor obtiene por su influencia y

	<p>corrompiendo a los jueces una ejecutoria por la que exige a los vecinos el pago de 75 cargas de pan ( 45 de trigo y 30 de cebada). El concejo se rebela quien le arremete al propio señor Pedro Barba Osorio y a su sirvientes a la vez que ocupan por la fuerza sus tierras y posesiones en la villa.</p>
1611.	<p>Ante la crisis económica y la despoblación de la villa que perdió en la peste de finales del siglo XVI la mitad de los vecinos, el concejo llega a un acuerdo ajuste o concordia forzosa con el señor, entre otras cosas porque los vecinos no disponían de dinero para pleitear. Pero el señor se venga cuando la villa sólo cuenta con una treintena de vecinos y ocupa por la fuerza los términos de Soelmonte y Llanos del monte</p>
Siglo XVII	<p>La documentación notarial se pierde y de alguna forma demuestra que ellos vecinos y el concejo ni pudieron ni tuvieron medios para pleitos por lo que el señor se impuso y le obligó a pagar el fuero señorial en función de las yuntas y del terreno trabajado. Hay que tener en cuenta que la villa quedó muy reducida y en una crisis económica de la que sólo van a salir a finales del siglo XVII. Pero, la recuperación demográfica y económica de las tres primeras décadas del siglo XVIII va a cambiar las cosas y los nuevos vecinos de la villa, que de alguna forma nunca habían olvidado lo que se le había hecho a sus antepasados, parecen vengarse en unos momentos en los que tanto la coyuntura económica y las nuevas</p>

	<p>leyes de los monarcas ilustrados le habrían una vía de esperanza. La venganza iba a ser larga y los nuevos señores iban a tener que soportar largos y costosos pleitos. Pero, al final mereció la pena y hoy la villa cuenta con un patrimonio concejil o comunal que se lo deben a esos pleitos y al esfuerzo de sus antepasados.</p>
1741	<p>El concejo interpone nueva demanda al marqués ante la chancillería a fin de que devolviese y restituyese a los vecinos los términos de soelmonte y llanos del monte y una parte de las tierras marías. Se realizan pinturas y vistas oculares de los términos y al final los peritos fijan en 108 cargas y 2 heminas las tierras tierras marías que por haber sido roturadas en la Edad Media le corresponden al señor</p>
1747	<p>La villa obtiene sentencia favorable en el pleito planteado frente al marqués por la posesión y disfrute del los términos y tierras en litigio. En grado de revista el marqués obtiene una provisión real del Consejo de Castilla a su favor. El concejo da poder para seguir el pleito en 1747.</p>
1748	<p>El concejo hace escritura a favor de D. Francisco Bravo, natural de la villa y vecino de MADRID para pagarle los 4.000 reales que les prestó para el juicio.</p>
1750	<p>Nueva escritura a favor del anterior por prestarle 1750 reales.</p>
1751	<p>Dos nuevas escrituras para el mismo por el préstamo</p>

	de 1500 y 1500 reales para el juicio. Este natural de la villa y adinerado residente en Madrid le aportó el capital para el pleito iniciado en 1741.
1751	La sentencia de la Chancillería de Valladolid es definitiva: La villa obtiene una Real Carta Ejecutoria por la que se le reconoce la libre propiedad, pasto y rozo de los términos de soelmonte y llanosdelmonte y al marqués la propiedad del monte alto.
1752	El concejo da poder para defender la aplicación de la ejecutoria ante la oposición del marqués. Los gastos son tan cuantiosos que los vecinos hipotecan sus bienes y los comunales para obtener un préstamo de 30.000 reales . La deuda se mantenía en 1779 y el concejo acuerda arrendar el pasto de la dehesa, lo que provoca que los ricos vecinos ganaderos pongan pleito y se opongan al arriendo.
1755	Ante la actitud del marqués de no reconocer la sentencia la villa le planta un nuevo pleito ante la Chancillería contra el marqués.
1756	Dos nuevos poderes del concejo para el pleito y para exigir el reconocimiento de la Ejecutoria anterior. Esto lo motiva que el marqués obtiene una sentencia por la que el tribunal ordena que se le de posesión de todo el termino de soelmonte y llanos del monte y las tierras marías.
1757	El concejo apela la sentencia y da dos poderes para que el alcalde realengo de Fuentes de los Oteros les de posesión de los términos en litigio a raíz de la

	Ejecutoria ganada
1758	El concejo da poder para pedirle al marqués un acuerdo y que le de en foro perpetuo todas las tierras y términos que legalmente se le reconocen. Esta es una estratagema del concejo a fin de finalizar los pleitos.
1758	El concejo da poder reconociendo al marques la propiedad del valle de soelmonte y otras tierras a fin de componerse y llegar a un acuerdo que les afore todas sus posesiones.
1759	El concejo y el marqués llegan a un acuerdo para apear los términos y sus posesiones con el fin de aforárselos al concejo y terminar los pleitos. La crisis económica estaba presente.
1760	Nuevo poder del concejo en el que dicen que el marqués <i>doliendose de la pobreza de sus vasallos, usando de la piedad que su cristiano celo acostumbra fue su voluntad en convenir en dicho ajuste y foro para que tenga efecto y que en nuestro nombre y del nuestro concejo nos obligamos las escrituras necesarias...</i>
1760	El marqués con su poder y viendo la debilidad y pobreza de los vecinos gana nueva provisión que exige un nuevo deslinde y apeo de sus supuestas propiedades, a lo que se opone la villa por lo que da poder a fin de que definitivamente se les deje en la posesión de los términos que en su día se le adjudicaron por el tribunal y de los que le dio

	<p>posesión el alcalde realengo de Fuentes de los Oteros. Estaba claro que la estrategia del marqués no era la de aforarle los términos, sino consciente de la crisis económica, su intención era arruinarlos e impedir que siguieran pleiteando. Pero, poco conocía el marqués a sus vasallos.</p>
1763	<p>Este año fue crítico y conflictivo. La crisis económica no impidió que el concejo de Castil de Falé diera cuatro poderes y definitivamente le declarase la guerra al marqués ya que se sentían traicionados por un señor tan ... y poderoso. Así el administrador del marqués les requiere con una ejecutoria que les exige que se le guarde el prado denominado de soelmoente y que los vecinos no puedan entrar nunca en él pese a estar en terrenos concejiles. Un nuevo poder el concejo exige el reconocimiento de los términos litigados y sentenciados a su favor en 1751 ya que tienen libre aprovechamiento de los pastos y rozo de esos términos y el marqués que sólo posee el monte alto arrendó a las merinas los llanos. En el mes de Noviembre el marqués en un intento de asfixiar a los vecinos plantea en la Chancillería nueva demanda contra los vecinos reclamándoles 76756 reales de las rentas del monte de Castrillo y valle de so el monte desde el año de 1752 hasta 1763. Esto obliga a la villa a dar nuevo poder a fin de defenderse. La respuesta de ls vecinos ante tal acoso ya en el mes de Julio fue la de meter sus ganados en el valle de soelmonmte. Su</p>

	administrador les pone una denuncia por allanamiento de propiedad ya que dice que el valle de soelmonte es privativo del marqués.
1765	Nuevos poderes para apear el valle de soelmonte en el pleito pendiente contra el marqués.
1765	Demanda del marqués una vez ganada una provisión real contra los vecinos de Castil de Fale y su concejo exigiéndole seismil reales en compensación de los daños de leña en el monte denominado de Castrillo, monte que estaba en pleito y que los vecinos sólo reconocían la propiedad del marques en una parte alta. Los vecinos se defienden y dicen que en 1755 y 56 el alcalde de Fuentes de los Oteros les dio posesión y por tanto le exigen al marqués el pago al concejo de 51.000 reales resultantes de las rentas que el marqués había cobrado indebidamente de esos términos.
1770.	Nuevo poder del concejo en el que reconocen que llevan pleiteando contra el marqués más de 30 años sobre la pertenencia de los términos de soelmonte y llanos del monte. El marqués se llamó a la posesión del valle de soelmonte e intentó amojonarlo y lo deslindó ante la no conformidad del concejo, por lo que se oponen y dan nuevo poder.
1779	El concejo de la villa se ve envuelto en un nuevo pleito planteado por los ganaderos de la villa que se oponen a que se arriende el pasto de la dehesa. El concejo dice que lo hace para pagar los gastos de los

	pleitos y reducir el censo de 30.000 reales que deben.
1787	Dos poderes concejil otorgados por el concejo de Castil de Fale para hacer un intercambio de terreno con el marques en el monte y la dehesa..
1792	El concejo se ve inmerso nuevamente y da poder en el pleito iniciado por el marques que se llama a la propiedad de la dehesa. El concejo responde que están en posesión de ella desde que ganaron la ejecutoria hace más de cuarenta años.
1794	Poder concejil para llegar a un acuerdo con el marques y cambiarle un trozo de ladera y dehesa propio del concejo por un trozo de dehesa y monte.
<p>Nota : a través de los diferentes arriendos del monte y la dehesa del A. D. se aprecian los largos pleitos sostenidos entre el concejo de la villa y el marqués de Castrofuerte.</p> <p>A finales del siglo XVIII el señor arrienda el pasto del monte y el concejo el de la dehesa. En 1811 el concejo da poder a su representante para que acuda a Valderas a arrendar de manos del administrador de bienes nacionales el pasto el monte y valle de Castil de Fale. Parece claro que al no poder demostrar el marqués la titularidad del monte paso a manos del estado a partir de 1811.</p>	

**RELACION DE VECINOS LABRADORES Y SENAREROS  
DE LA VILLA EN LA PESQUISA DE 1792 REALIZADA  
PARA PAGAR AL MARQUES EL FORO SOBRE LAS  
TIERRAS MARIAS ROTURADAS O SENARAS.**

**Cada labrador con una yunta paga cuatro fanegas (una carga)  
de trigo y con media yunta, dos fanegas.**

**Cada vecino senarero, es decir los que no poseen tierra  
privativa, paga media fanega o seis celemines de trigo por  
cada carga de tierra que trabaja.**

NOMBRE	CATEGORÍA	PAGA FANEGAS o CELEMINES EN TRIGO
Bicente Merino	labrador	4
Santiago Ruano	labrador	4
Simon González	labrador	4
Bicente Martinez	labrador	4
Manuel Fernández	Labrador	4
Santiago Pérez	labrador	4
Joaquin Fernandez	Labrador	4
Antonio Barrientos	Labrador	4
Jose Cordero	Labrador	4
Ana María Perez	Labrador	4
Aguntin Azan	Labrador	4
Miguel Manso	Labrador	4
Andres Herrero	Labrador	4
Antonio Manso	Labrador	4
Juan Llorente	Labrador	4

Bentura Blanco	Medio labrador	2
Felipe Fernandez	Labrador	4
Francisco García	Labrador	4
Agustin Herrero	Labrador	4
Manuel y Baltasar García	Labrador	4
Jose Barrera	Labrador	4
Juan de la Iglesia	Medio labrador	2
Juan Gutierrez	Labrador	4
Francisco Robles	Medio labrador	2
Miguel Fernandez	Labrador	4
Bicente Barrientos	Labrador	4
Gregorio Fernandez	Labrador	4
Froilan Martinez	Medio labrador	2
Heredera de Andres Fernandez	Labrador	4
Domingo García	Medio labrador	2
Pedro Roldan	senarero	Media carga de tierra paga 3 celemine de trigo
José Fernandez	senarero	Por dos cargas, una fanega
Sebastián Blanco	Searero	6 celemine
Francisca Ordoñez	Senarero	6 celemine
Antonio Barrientos	Senarero	1 fanega
Santiago Garcia	Senarero	9 celemine
Miguel Garcia	Senarero	6 celemine
Francisco Garcia	Senarero	1 fanega

Marcelo Garcia	Senarero	1 fanega
Manuel Garcia	Senarero	6 celemines
Jose Toral	Senarero	9 celemines
Fernando Garcia	Senarero	6 celemines
Francisco Uceda	Senarero	6 celemines
Matias Zancada	Senarero	6 celemines
Pedro de la Iglesia	Senarero	1 fanega
Mateo Garcia	Senarero	9 celemines
Luis Toral	Senarero	6 celemines
Andres Blanco	Senarero	6 celemines
Francisco Blanco	Senarero	6 celemines
Miguel Blanco	Senarero	6 celemines
Josefa Fernandez	Senarero	1 fanega
Juan Toral	Senarero	3 celemines
Santos Barrientos	Senarero	6 celemines

### **III. EL ESCUDO DE ARMAS DEL AYUNTAMIENTO DE CASTILFALE.**

## **1. CRITERIOS DE ELABORACION Y JUSTIFICACIÓN.**

Muy en la línea de lo expuesto anteriormente, el escudo que proponemos se ajusta plenamente en sus formas y estructura a la normativa recogida en la Ley de Régimen Local vigente en la Comunidad autónoma de Castilla y León. A diferencia del anterior, las figuras adoptadas para ocupar sus cuarteles son el resultado de un intenso proceso de análisis a partir de una profunda memoria histórica a través de la cual hemos conocido no sólo los condicionantes físicos o naturales, sino sobre todo el marco de funcionamiento administrativo, económico y social en el que se desarrollaron las comunidades concejiles que integran el municipio desde los tiempos remotos de la formación y consolidación de dichas comunidades. Se intenta, pues, recoger algunos de los elementos más significativos del pasado histórico y representativos de las comunidades que integran el municipio.

En primer lugar creemos que el escudo debe ser el testimonio más directo del marco político administrativo que suprimió la implantación del nuevo ayuntamiento y que de alguna forma mantuvo su vigencia legal y jurídica desde la Edad Media hasta el siglo XIX, es decir más de ocho siglos de Historia común y representativa en torno A LA CONDICIÓN DE VILLA con jurisdicción propia. Sus diferentes nombres y su vinculación histórica deben de quedar definitivamente plasmados en la bordura de oro que rodea el campo en la que figura en sable la siguiente inscripción: CASTIL DE FALE. A su vez, siguiendo

la tradición heráldica leonesa la presencia de los símbolos del reino de león en suyo seno y tutela se formó la villa realenga en el siglo XI ha de estar presente, de la misma forma que las referencias topográficas que dan nombre a la villa. La presencia de un castillo, cuyo enclave y base se conserva en la actualidad, nos da pie, de la misma forma que el propio nombre de la villa ( Castil-castillo- de Fale ( Castilfalé) para escoger la figura del primer cuartel. En esta misma línea, tanto su condición de villa con jurisdicción propia, como el privilegio que conservaron a la hora de impartir sus propios vecinos la justicia ordinaria en la figura del alcalde ordinario, propuesto por el concejo y aprobado por el señor, justifica plenamente la figura del tercer cuartel, máxime cuando documentalmente se demuestra la defensa colectiva que la comunidad concejil y vecinal hacen de sus privilegios a lo largo de los siglos.

## **2. EL ESCUDO DE ARMAS: DESCRIPCION Y ELEMENTOS.**

**CAMPO:** forma del campo tradicional española, rectangular, cuadrilonga y redondeada en su parte inferior (arco carpanel al revés sin punta) en proporciones de cinco de ancho por seis de alto. Acaudado y sin estar rematado en punta.

**Particiones del campo: TRAE UN ENTADO.**

**PRIMER CUARTEL:** sobre campo de gules, un castillo de plata mazonado de sable.

**SEGUNDO CUARTEL:** en campo de plata trae un león rampante de púrpura, linguado, uñado y coronado de oro.

**TERCER CUARTEL:** sobre campo de sinople, una v de villa en sable y sobre ella un rollo o columna de oro.

**BORDURA:** de oro cargada con la inscripción de sable: CASTIL DE DE FALE

**TIMBRE:** timbra el campo del escudo corona real cerrada.

### 3. BOCETO DEL ESCUDO PROPUESTO EN COLOR



**BOCETO DE LA BANDERA PROPUESTA PARA  
REPRESENTAR AL AYUNTAMIENTO DE CASTILFALÉ.**

**El escudo municipal va insertado en el triángulo blanco.**

